

Julio 13 de 1939

20ª REUNION — 18ª SESION ORDINARIA

Presidencia del señor Juan G. Kaiser

MINISTRO PRESENTE:  
de Agricultura,  
Ingeniero José Padilla;

DIPUTADOS PRESENTES:

Acuña, Aurelio S.  
Aguiar, Henoch D.  
Aguirre Cámara, José  
Agulla, Juan Carlos  
Alsina, Juan José  
Alvarez Colodrero, Carlos  
Alperin, Samuel  
Amadeo y Videla, Daniel (h.)  
Anastasi, Leonidas  
Araujo, Eduardo  
Astesiano, Carmelo I.  
Barrau, José  
Barrionuevo, Gerardo  
Basualdo, Honorio  
Beiró, Angel Francisco  
Bertotto, José G.  
Boatti, Ernesto C.  
Boero, Albino  
Busaniche, Julio A.  
Busignani, Mario  
Cabral, Humberto  
Caferata, Juan F.  
Cantilo, José Luis  
Cappellini, Luis E.  
Carreras, Ernesto L. de las  
Castex, I. Mario  
Cisneros, Carlos E.  
Cooke, Juan I.  
Cordero, Octavio  
Courel, Carlos D.  
Damonte Taborda, Raúl  
De Miguel, Benito  
Devoto Acosta, Alcibiades  
Díaz, Raúl  
Dickmann, Enrique  
Duffy, Eduardo N.

Eyto, Francisco F.  
Fassi, Santiago Carlos  
Fazio Rojas, Lorenzo  
Figueroa, Julio A.  
Garona, Juan A.  
Godoy, Raúl  
Gómez Grandoli, Clemente  
Gómez Rincón, Abel  
González, Benjamin S.  
Grassi, Alfredo  
Grisolia, Luis  
Güerci, José María  
Guerrero, José Rafael  
Guillemelli, Aquiles M.  
Guillot, Victor Juan  
Güiraldes, Carlos (h.)  
Gutiérrez, José María  
Hardoy, Emilio J.  
Horne, Bernardino  
Infante, Faustino  
Irigoyen, Carlos  
Iriondo, Urbano de  
Jaramillo, José María  
Jiménez, Mario  
Kaiser, Juan G.  
Labayen, Juan  
Lanus, Adolfo  
Lezica Alvear, Florencio  
Lima, Vicente Solano  
López, Hector S.  
López García, Francisco  
López Merino, Ismael  
Maino, Alejandro  
Martínez, Benito E.  
Medina, Justo G.  
Méndez Calzada, Joaquín  
Montagna, Carlos P.  
Moreno, Ricardo A.  
Morrough Bernard, Juan F.  
Mugica, Adolfo  
Noel, Martín  
Onsari, Fabián  
O'Reilly, Guillermo R.

Ortiz Basualdo, Samuel  
Ortiz de Zárate, Miguel  
Osorio Soler, Manuel E.  
Osorio, Miguel  
Pagano, David J.  
Palacio, Benjamín  
Pastor, Reynaldo A.  
Paz, Eduardo  
Peco, José  
Peña, Ernesto S.  
Piedrabuena, Carmelo P.  
Pinto, Manuel (h.)  
Pita, Carlos A.  
Pizarro, Néstor A.  
Radio, Pedro  
Ravignani, Emilio  
Repetto, Nicolás  
Rocha, Justo V.  
Ruggieri, Silvio L.  
Saá, Alberto  
Sacccone, Romeo D.  
Sammartino, Ernesto  
Sancerni Giménez, Julián  
Sánchez, Adolfo B.  
Schoo Lastra, Dionisio  
Siri, Obdulio F.  
Solá, Juan E.  
Solana, J. Félix  
Solari, Juan Antonio  
Soldano, Arquímedes A. E.  
Soto, Pedro Numa  
Susan, José C.  
Tamborini, José P.  
Teisairé, Eduardo (h.)  
Vásquez, Juan Carlos  
Videla Dorna, Daniel  
Zara, Edmundo Leopoldo

AUSENTES, CON LICENCIA:

Arias Uriburu, Juan  
Beristain, Francisco

Biancofiore, Rafael  
Ferreira, Antenor R.  
Gholdi, Américo  
Hernández, Clodomiro  
Hernández, Victorio  
Izurieta Fourquet, Agustín  
Martínez, F. Benigno  
Martínez, Gregorio N.  
Martínez, Manuel  
Noel, Carlos M.  
Paz Fosse, Ramón D.  
Peña, Solano  
Pérez, Deolindo  
Prat Gay, Fernando de  
Quintana, Fenelón  
Reyna, Rodolfo  
Sáenz, Mario  
Simón Padrós, J.  
Solís, Rogelio J.  
Tapia, Numa  
Urien, Enrique César  
Vélez, Francisco M.  
Vilgré La Madrid, Juan  
Zavala Ortiz, Teobaldo  
Zunino, Marcelo A.

AUSENTES, CON AVISO:

Muniagurria, Walter Julio  
Pandolfo, Pio

AUSENTES, SIN AVISO:

Arbeletche, Aníbal P.  
Barceló, Alberto  
Carús, Agustín J.  
Castro Frediani, Manuel L.  
Eberlé, Enrique  
Illanes, Eloy J.  
Lazo, Plácido C.  
Solari, Felipe C.  
Vilchez, Martín

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

I.—Peticiones particulares.

II.—Proyecto de ley, del señor diputado Horne,

sobre adquisición o expropiación de una superficie de terreno sobre el arroyo El Palmar, en el departamento Colón (Entre Ríos), para ser destinado a parque nacional.

III.—Proyecto de ley, del señor diputado Courel y otros, sobre subsidio a la revista «La ilustración argentina».

- IV.—Proyecto de ley, del señor diputado Aguirre Cámara, sobre pensión a la señora Ramona Palacios de Etchegaray e hijas solteras.
- V.—Proyecto de ley, del señor diputado Beiró y otros, sobre sustitución del artículo 9º de la ley número 11.575, de jubilaciones bancarias.
- VI.—Proyecto de ley, del señor diputado Labayen y otros, sobre expropiación de una superficie de terreno de El Palmar, del departamento Colón (Entre Ríos), con destino a parque nacional.
- VII.—Proyecto de ley, del señor diputado Medina y otros, sobre reforma de los artículos 37, 44, 46 y 54 de la Constitución nacional, relacionados con la elección de legisladores suplentes.
- VIII.—Proyecto de ley, del señor diputado Zara, sobre pensión a la señora Paulina Lombardo de Gaviola.
- IX.—Proyecto de ley, del señor diputado Caf ferata, sobre pensión a las señoritas María Ana y Trinidad Otero Capdevila.
- X.—Proyecto de resolución, del señor diputado Solari (J. A.) y otros, por el que se dispone la sustitución de los artículos 90, 100, 101, 137 y 166 del reglamento de la Honorable Cámara.
- XI.—Proyecto de resolución, del señor diputado Rocha y otros, sobre adquisición de tres obras del pintor argentino José Martorell.
- XII.—Proyecto de ley, del señor diputado Jiménez y otros, declarando comprendido en los beneficios de la ley de jubilaciones y pensiones de la Policía de la Capital Federal al personal de policía marítima y fluvial.
- XIII.—Proyecto de ley, del señor diputado Pastor, sobre creación de a biblioteca técnica nacional.
- 4.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones, a los señores diputados Reyna, Simón Padrós y Arias Uriburu.
- 5.—Moción del señor diputado López Merino, para considerar con preferencia el despacho por el que se eleva a embajada la representación diplomática en la República de Colombia. Es aprobada.
- 6.—Indicación del señor diputado Zara, sobre pronto despacho del proyecto de construcción de frigoríficos para frutas.
- 7.—Moción para considerar con preferencia el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,

- sobre subsidio para el I Congreso Panamericano de la Vivienda Popular. Es aprobada.
- 8.—Se considera y aprueba el despacho a que se refiere el número anterior.
- 9.—Moción del señor diputado Morrogh Bernard, sobre inserción de un memorial dirigido por la Confederación de Sociedades Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Es aprobada.
- 10.—Indicación del señor diputado Solari (J. A.), relacionada con la remisión de los informes sobre permisos de inmigración.
- 11.—Se aprueba el proyecto de resolución de, señor diputado Dickmann, por el que se solicita informes al Poder Ejecutivo, sobre obras para proveer de agua potable a poblaciones del territorio de Santa Cruz.
- 12.—Proyecto de declaración, del señor diputado Damente Taborda, por el que la Honorable Cámara saluda a la Honorable Cámara de Diputados de Francia, con motivo del 150º aniversario de la Revolución Francesa. Es aprobado.
- 13.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Legislación Agraria, sobre creación del Consejo Nacional de Colonización.

—En Buenos Aires, a trece días del mes de julio de 1939, siendo la hora 15 y 59:

## 1

## MANIFESTACIONES EN MINORIA

**Sr. Iriondo.** — Hago indicación de que se continúe llamando diez minutos más.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Si hay asentimiento, se seguirá llamando.

—Asentimiento.

## 2

## ACTA

—A la hora 16 y 5:

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Queda abierta la sesión con 83 señores diputados en el recinto. Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado Sánchez, se suprime la lectura, y se da por aprobada el acta.

13

## COLONIZACION NACIONAL.

—Véase el despacho en la página 168.

—Ocupa su asiento el señor ministro de Agricultura, ingeniero don José Padilla.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Legislación Agraria sobre colonización

**Sr. Repetto.** — Pido la palabra.

Permítame la Honorable Cámara que inicie este discurso evocando algunas de las enseñanzas de nuestro gran maestro el doctor Juan B. Justo sobre la cuestión que discutimos en este momento. Realizaré así un acto de estricta justicia y a la vez emitiré en este recinto conceptos del maestro que por su calidad, su profundidad y su valor deberán ser siempre tenidos en cuenta cuando en nuestro país se discuta este grave problema de la distribución y aprovechamiento de la tierra.

Repetiré textualmente sus palabras, porque interpretan cabalmente mi pensamiento y me parece que esos conceptos no podrían ser expresados en forma más simple y más clara. Dice: «Para la población y el cultivo de la tierra tiene ésta que dividirse en chacras, granjas y quintas de extensión adecuada a la vida y al trabajo de familias campesinas. Esa subdivisión del suelo en unidades agrícolas estables, así como la inversión de trabajo y de capital en construcciones y otras mejoras duraderas o permanentes, que hacen sanas y productivas las labores rurales, son impedidas o estorbadas en algunos países por las formas tradicionales de la propiedad raíz. Las necesidades más fundamentales del pueblo y las aspiraciones más legítimas de la población entera entran así en conflicto con la rutina política y jurídica; privilegios advenedizos o vetustos e intereses mal entendidos se oponen a la expansión de la población y a la necesaria evolución técnicoeconómica. Donde esto sucede se plantea la cuestión agraria como el problema más palpitante de la vida nacional.»

La Argentina tiene una grave cuestión agraria, que nosotros intentamos, no diría resolver, pero sí colocar en la vía de una solución futura. Esto lo digo no obstante haber subscrito el despacho en minoría, sin haber dejado constancia de ninguna disidencia. Me parece que es un

rasgo de lealtad que debe ser apreciado el de un diputado que, no obstante haber firmado un despacho sin formular disidencia alguna, considera que ese despacho tiene un valor relativo y que sólo representa un primer esfuerzo, una generosa tentativa para llegar a la solución de ese arduo problema.

De esta cuestión agraria no se habla en muchos países de la tierra, por ejemplo en Francia y en países americanos como Estados Unidos y Canadá. De este problema se habla, por ejemplo, en España, se ha hablado mucho en Irlanda y es evidente que es el que domina en toda la América latina. La cuestión agraria es un problema de gran actualidad en nuestro gran continente, donde la tierra está en realidad en manos de hombres que la detentan en extensiones realmente fantásticas. «La cuestión agraria es una cuestión en toda la América latina, donde una pequeña clase de terratenientes satisfechos de la renta que sacan de sus latifundios despoblados y apenas cultivados pero inmensos, substraen a la vida y la población todo un continente, deseando, decía Justo —y esta es una gran verdad en nuestro país— que éste fuese siempre un gran criadero de cerneiros y vacas y no el asiento de una densa y culta población agrícola. Contra tan monstruoso estado social se han de aunar todas las fuerzas progresistas del país y lo más inteligente y generoso de la política extranjera».

La República Argentina, después de cuatro siglos y medio de la conquista española, después de más de un siglo de la Independencia y de 86 años de vida más o menos institucional, asiste en este momento al derrumbe progresivo de la numerosa clase conocida entre nosotros con el nombre de arrendatarios, clase que hoy preferiría ser reducida a la condición de simple peón y que se hallaría en situación mucho más favorable si le fuera dado en calidad de peón encontrar alojamiento para él y su familia. En nuestro país el alojamiento para la familia del peón se niega en principio en la mayor parte de todos los establecimientos y especialmente de los establecimientos ganaderos.

«Este hundimiento económico del agricultor argentino, se ha dicho, es la consecuencia del cultivo extensivo, de la especulación en el valor de la tierra, de los fletes ferroviarios extorsivos, de los arrendamientos elevados y de los precios ruinosos de los productos agrícolas, que no sólo impiden la división de las parcelas y su adquisición por los mismos que las cultivan, sino que favorecen la especulación de

las mismas por hábiles acreedores hipotecarios, en base a la ruina de no pocos terratenientes provocada por esta misma especulación o por la baja fantástica de los productos agrícolas. El problema agrario es, pues, uno de los más graves que ofrece hoy la República Argentina y está reiteradamente probado que las ayudas periódicas y casi siempre tardías prestadas a los agricultores por las instituciones de crédito, no hacen más que prolongar la agonía de aquéllos. En nuestros días se ha tomado la medida heroica de despreciar intencionalmente la moneda, de gobernar con una política sui generis los cambios y de constituir al gobierno en adquirente a precio fijo del cereal; pero sería un siniestro error considerar que con ello la situación ha quedado arreglada y el problema resuelto.»

La persistencia del pésimo régimen agrario que impera en nuestro país, ha ido formando poco a poco un clamor contra el latifundio, contra esta agricultura de rapiña a que nos condena el sistema de cultivos extensivos, en manos de chacareros arrendatarios, agricultura que limita el pastoreo, que anula el monte y la huerta, proscribe la vivienda digna de seres humanos, impide la multiplicación de no pocas especies animales y vegetales útiles al hombre e imprime ese aspecto miserable tan característico que ofrecen las zonas agrícolas donde predominan o imperan los arrendatarios.

Como esta pintura podría parecer recargada de sombras, ya que el pincel lo maneja en este momento un hombre de ideas un poco avanzadas o exageradas, como suele decirse voy a apoyarme en la opinión y en el juicio de hombres contra los cuales existen menos prevenciones políticas y que han emitido a este respecto juicios que son tan lapidarios como éste que yo acabo de emitir.

En una conferencia pronunciada hace poco tiempo por el ingeniero agrónomo señor Hugo Miatello, conferencia destinada a demostrar la influencia que el desarrollo de los ferrocarriles argentinos ha ejercido sobre la evolución de nuestra agricultura, evocó al final las lamentables condiciones agrarias de la Argentina «tan despoblada y aun tan pobre —dijo— no obstante las infinitas posibilidades de que está dotada». Y agregó: «Desde los trópicos hasta la Patagonia y desde los Andes hasta las playas fluviales y oceánicas se impone el trabajo creador y renovador del hombre que tiene por aliado la naturaleza fecunda y productora; pero todo ello contrasta con el sistema de agricultura imperante. Es sabido que

la proporción de agricultores arrendatarios alcanza a un 70 %, siendo el 30 % restante tan sólo de propietarios. De los casi 300.000.000 de hectáreas de la extensión territorial del país, hay disponibles para la ganadería y agricultura unos 200.000.000 de hectáreas, de las cuales se cultivan algo más de 25.000.000».

El ingeniero agrónomo señor Pedro F. Marotta, antiguo funcionario del Ministerio de Agricultura, en un discurso realmente magistral pronunciado no hace mucho sobre «Trabajo y tierra», exclamó: «Es el latifundio el que ahoga a nuestro país. Las propiedades de más de 1.000 hectáreas representan el 68, el 67 y el 52 por ciento de la superficie total de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, respectivamente. Este es el problema fundamental de la economía argentina: hoy como ayer es el desierto, las tierras incultas y abandonadas».

He transcripto la opinión de dos distinguidos funcionarios, que la han elaborado en el silencio y en la tranquilidad de sus gabinetes, reflexionando sobre las condiciones reales de nuestro país, que ellos conocen a fondo. A esas opiniones quiero agregar otras más, haciendo síntesis brevísima de una interesante conferencia pronunciada hace poco por el ingeniero agrónomo Alejandro Botto, también un antiguo funcionario del Ministerio de Agricultura, quien ha tenido la valentía de escribir en las Jornadas Agronómicas del año 1934, estas conclusiones, que son realmente impresionantes.

Hago una síntesis de aquel discurso: Nuestra agricultura está llena de problemas que urge resolver. La Argentina no ha tenido ni tiene un programa agrario, que es fundamental. En materia técnica se siembra cualquier semilla, en cualquier suelo y en cualquier parte. No se escoge la tierra adecuada para cada semilla. —¿Qué confirmación prestan los actuales hechos de la erosión de La Pampa y los médanos, a las afirmaciones contenidas en este discurso!— Faltan los conocimientos profesionales. Se perpetúan las plagas. Falta una legislación agraria moderna. No se ha resuelto ni se quiere resolver el problema de la tierra. Se mantiene en pie el sistema del arrendamiento. La colonización duerme. Los elevadores, todos sabemos que duermen también. (*Risas.*) Los fletes ferroviarios son extorsivos. Falta organización de la agricultura y las cooperativas casi no existen, aunque reciben muchas loas del mundo oficial. Se necesita crear un órgano orientador de la producción.

Este absurdo régimen agrario neutraliza y esteriliza todo, y hasta neutraliza y esteriliza el arsenal mecánico adoptado en los últimos tiempos por la agricultura argentina con el objeto de reducir el costo de producción. Gran arsenal, maquinarias perfeccionadas y costosas que yacen generalmente expuestas a la intemperie y que se transforman a veces, como lo expresó muy humorísticamente un alto funcionario del Ministerio de Agricultura, en un espléndido gallinero. Cosechadoras que al cabo de pocos años se convierten en las chacras en el dormitorio de las gallinas.

Podría citar otras opiniones, pero me parece que no hay necesidad de recargar el cuadro, y paso a ocuparme del segundo capítulo de mi exposición.

Yo quiero que precisemos bien los orígenes del latifundio argentino, y declaro de antemano que no lo hago con el propósito de molestar ni de herir ninguna susceptibilidad personal. Lo hago con el propósito de demostrar a algún diputado ingenuo, si es que todavía queda algún ejemplar, y el país todo, que podrían esperar de esta ley la resolución del problema de la tierra; lo hago para que se comprenda que este problema del latifundio argentino es algo más duro y recio de lo que la gente se imagina en general; es algo que obedece a causas que gravitan en lo político, económico y social con una fuerza tan intensa que, para dividirlo y desmenuzarlo, se necesitaría formar una conciencia adecuada en las masas campesinas. Sería necesario también que surgiera el convencimiento del perjuicio enorme que ocasiona, en los hombres que dirigen la política y la economía de este país. Mientras esa revolución en los espíritus de los hombres del campo y de la ciudad, que tienen alguna influencia sobre estos asuntos, no se produzca, creo que el latifundio permanecerá intacto y enhiesto como una roca granítica.

El latifundio argentino se origina en las fallas fundamentales y en la mala aplicación de la ley sobre enfiteusis. Necesitado de recursos fiscales, y al mismo tiempo de una garantía para los empréstitos exteriores que proyectaba realizar, Rivadavia sancionó la ley de enfiteusis, pero sin limitar la superficie de la tierra concedida y sin obligar tampoco a los enfiteutas a ocupar y a trabajar personalmente la tierra. Toda la enfiteusis se redujo sencilla-

mente a conceder en arrendamiento extensiones enormes de tierra sin más obligación que la de pagar el canon. Y ya se verá cómo esos contratos se cumplieron. Esas enormes extensiones de tierra fueron subarrendadas de inmediato a precios más o menos elevados y los enfiteutas se guardaron muy bien, por lo general, de pagar el canon. Eso ha quedado bien establecido.

Sarmiento, que se había apercebido de todas las fallas fundamentales y de las consecuencias deplorables que tendría este ensayo enfiteuta en nuestro país, sostenía que lo urgente era cambiar el régimen de la tierra, propendiendo a su división y distribución racional a fin de que el país se poblara, enriqueciera y civilizara. Invitado a expresar su juicio sobre un proyecto de codificación de la enfiteusis en Buenos Aires, redactado por el doctor Gabriel Ocampo, en 1851, Sarmiento se atrevió —porque hay que decir «se atrevió» en un momento en que la tierra se dilapidaba y se distribuía a la marchanta entre «gente bien» en la provincia de Buenos Aires— se atrevió a manifestar desde las columnas de «El Nacional», que esas leyes de enfiteusis eran la causa de todos los trastornos, tiranías, confiscaciones, guerras y desgracias que habían pesado por tantos años sobre Buenos Aires.

Sarmiento era adversario decidido de la enfiteusis, porque la había visto degenerar en un simple sistema de tierra poseída sin ocupación. Auténticos o simulados enfiteutas, que no trabajaban ni poblaban la tierra, pudieron en época de Rosas, comprarla a vil precio y en extensiones enormes. Mientras en Estados Unidos la tierra era un factor decisivo en el proceso acelerado de su población, enriquecimiento y civilización, entre nosotros la tierra fué, desde el principio, elemento de poder y más tarde incentivo de especulaciones.

Por eso decía Sarmiento: «¿Quién era Rosas? Un propietario de tierras. ¿Qué acumuló? Tierras. ¿Qué dió a sus sostenedores? Tierras. ¿Qué quitó o confiscó a sus adversarios? Tierras.» En su interesante y bien documentada obra sobre los orígenes de la burguesía terrateniente argentina, el ex diputado señor Jacinto Oddone estudia las distintas leyes y decretos sancionados en la provincia de Buenos Aires a partir del año 1836, que facultaban al gobierno para vender tierra pública. Ahí está el origen del latifundio argentino, su enorme extensión originaria. El que se percate bien de este origen podrá darse cuenta de las dificultades del problema que tenemos por delante.

Por la ley del 10 de mayo de 1836, se facultó al gobierno de la provincia a vender 1.500 leguas de campo, de las cuales en seguida se enajenaron 1.247 leguas entre 235 adquirentes, de modo que les tocó a cada uno de ellos un promedio de 5 leguas y un tercio. ¿Quiénes fueron los compradores de estas tierras? Fueron los propios enfiteutas, muchos de los cuales no habían pagado el canon.

Tengo aquí la nómina de los enfiteutas compradores en esa venta de 1.500 leguas de tierra ordenada por Rosas; no voy a leer toda la lista, porque es muy larga, pero voy a señalar a los que hicieron compras de extensiones superiores a seis leguas. Tenemos a Tomás M. Anchorena, que compró 30 leguas en Independencia, en Chascomús, en la laguna El Hinojal y en Vitoras; Alzaga, Félix D., compró 43 leguas en Volcán, Lobería, Monsalvo e Independencia; Alzaga Unzué, 20 leguas en Magdalena, Independencia y Chapaleufú; Baudrix, Máximo, 8 leguas en Lobería; general Balcarce, Marcos, 13 leguas en 25 de Mayo; Mariano Biais, 18 leguas en Areco; Juan Cano, 7 leguas en Arrecifes; Ambrosio Crámer, 20 leguas en Volcán; Cobo Manuel, 12 leguas en Lobería; Chielana y Olivares, 14 leguas y media en Independencia; general Eustoquio Díaz Vélez, 17 leguas en Necochea; Mariano Fernández, 22 leguas en Volcán, Chascomús y Lobería; Juan M. Fernández, 29 leguas en Independencia; Pedro García, 20 leguas en Volcán; Bernarda F. de Gorostiaga, 9 leguas en Chivilcoy; Felipe S. Miguens, 33 leguas en Bahía Blanca, Tandileofú e Independencia; Manuel Motillo, 17 leguas en Azul e Independencia; Ricardo Moreno P., 12 leguas en 25 de Mayo; Jacinto Machado, 12 leguas en Lobería; J. Ortiz Basualdo, 8 leguas en Azul; Juan B. Peña, 20 leguas en Lobería; Hipólito Pineo, 10 leguas en Independencia; Esteban Puddicom, 11 leguas en Monsalvo y Arrecifes; José M. Rosas, 20 leguas en Volcán; Francisco Rosas, 10 leguas en Azul; C. Sáenz Valiente, 6 leguas en Lobería; Valerio Sánchez, 7 leguas en Independencia; Juan M. Terrero, 14 leguas en Arrecifes; Juan M. Silva, 24 leguas en Azul; Pedro J. Vela, 60 leguas en Tandil, Chapaleufú e Independencia.

**Sr. Schoo Lastra.** — ¿Me permite el señor diputado?

¿De dónde vienen esas ventas?

**Sr. Repetto.** — Estos datos son tomados del Registro de la Provincia de Buenos Aires.

**Sr. Schoo Lastra.** — Quería preguntar en qué año se vendieron.

**Sr. Repetto.** — ¡Pero lo he dicho! En 1836, el primer decreto de Rosas.

**Sr. Schoo Lastra.** — Muchas gracias.

**Sr. Repetto.** — En 28 de mayo de 1838, es decir, dos años después, Rosas dió un decreto poniendo en venta las tierras exceptuadas de la renovación del contrato enfiteutico, estableciendo las mismas condiciones y precios de la venta anterior, esto es: a 5 mil pesos moneda corriente la legua de las de mejor calidad y ubicación. El peso moneda corriente, que tal vez no han conocido muchos de los señores diputados, valía 4 centavos oro; 25 de esos pesos formaban un peso fuerte. Esta segunda venta abarcó una superficie de 1936 leguas, que fueron adquiridas en parte por los compradores de la venta anterior y en parte por los enfiteutas que recién entraban a la categoría de propietarios.

Justo es reconocer —y hago esto con placer, porque no querría dejar establecida una vinculación exclusiva y estrecha entre la tiranía de Rosas y la gente favorecida por estas grandes compras— que a la caída de Rosas la política de enajenar furiosamente la tierra pública continuó sin interrupción en la provincia de Buenos Aires. El 16 de octubre de 1857 la Legislatura de Buenos Aires dictó una ley autorizando al Poder Ejecutivo para proceder al arrendamiento de las tierras de la provincia. Se acogieron a esta ley 333 personas, las que arrendaron 1221 leguas, a razón de casi cuatro leguas por persona. No voy a leer los nombres de estas personas porque sería muy extenso, pero sí voy a dar los de algunos arrendatarios de seis o más leguas. Son los siguientes: Luis Amadeo, seis leguas en Junín; Alejandro Balcarce, seis leguas en Tapalqué; Justo Barda, doce leguas en Azul; Mariano Brizuela, seis leguas en Lobería; José M. Barrera, seis leguas en 25 de Mayo; Luis Chapeaurouge, seis leguas en Bragado; Pedro Córdoba, seis leguas en Bragado; Nicolás Coronel, seis leguas en Tandil; Emilio Conesa, seis leguas en Rojas; Bernardo Calderón, seis leguas en 9 de Julio; Juan Capdevila, seis leguas en Junín; Enrique Clause, seis leguas en Bahía Blanca; Ruperto Castaño, seis leguas en Lobería; Venancio Caparros, seis leguas en Lobería; Carlos Díaz, seis leguas en Bahía Blanca; Jorge Dickson, seis leguas en 25 de Mayo; Marcos Durán, seis leguas en Bragado; Martín Gainza, seis leguas en Lobería; Juan Etchevest, seis leguas en Bahía Blanca; Mariano Echenagucía, dieciocho leguas en Lobería; Macedonio Fernández, seis leguas en 25 de Mayo; Eduardo Frers, seis leguas en Bragado; Favio González, seis leguas en Lobería; José de Elizalde, siete le-

en Junín; Pedro Herrera, seis leguas en Lobería; Martín Iraola, doce leguas en Azul; José Iraola, doce leguas en Azul; S. M. Jurado, seis leguas en Tapalqué; Benigno García, seis leguas en Lobería; Hilarión Medrano y Manuel Medrano, doce leguas cada uno en Bahía Blanca; González Martínez, seis leguas en Lobería; Brígida González Martínez Gómez seis leguas en Lobería; Joaquín Olivera, doce leguas en Bahía Blanca; Eduardo Olivera, seis leguas en Lobería; Nolasco Pereira, seis leguas en 25 de Mayo; Félix Pico, seis leguas en Lobería; Manuel Rosetti, once leguas en Lobería; Marcelino Rodríguez, diez leguas en Lobería; Norberto Ramírez; doce leguas en Quequén. Y así sucesivamente.

Diez años después de sancionada esta ley de 1857, se sancionó otra el 10 de enero de 1867, por la cual se prohibía la renovación de los contratos de arrendamientos celebrados en virtud de la primera ley, y se autorizaba la venta de las tierras arrendadas. Parece obvio hacer presente que los arrendatarios se acogieron a la nueva ley y adquirieron la tierra que arrendaban, pagando por ella, según la sección, de 120 a 150 mil pesos; y de 200 a 400 mil las mejores.

Según la Guía de Contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires para el año 1928, las propiedades rurales de más de cinco mil hectáreas, ocupan en la provincia una superficie de cerca de la tercera parte del total de la provincia y están en poder de poco más de un millar de personas: 1.048 personas poseen 100.000 kilómetros cuadrados.

Tengo la distribución de estos latifundios y noto que los más grandes están en Ayacucho: 25 latifundios de más de 25 mil hectáreas. En Coronel Dorrego hay 23 latifundios de más de 25.000 hectáreas; en Coronel Pringles, hay 21 de más de 5.000; en General Madariaga, 22; en General Pico, 26; en General Villegas, 44; en Guaminí, 23; en Lincoln, 18; en Lobería, 23; en Necochea, 30; en Olavarría, 28; en Patagones, 58; en Pehuajó, 25; en Tandil, 20; en Tres Arroyos, 23 y en Villarino, treinta y siete.

A esta altura del desarrollo económico, político y social de la República hay todavía en lo que llamamos, por costumbre tal vez, primer Estado argentino, 50 familias dueñas de más de 30.000 hectáreas cada una. Así, por ejemplo, la familia de Alzaga Unzué posee en esta provincia 400.938 hectáreas, que según la Contribución Territorial están valuadas para el año 1928 en 111.826.700 pesos; Anchorena, 382.600 hectáreas; Luro, 232.336; Pereyra

Iraola, 191.218; Pradere, 187.034; Guerrero, 182.449; Leloir, 181.000; Santamarina, 158.000; Duggan, 129.000; Pereda, 122.000; Duhau, 113.000; Herrera Vegas, 109.000; Zuberbühler, 105.000; Martínez de Hoz, 101.000; Estrugamou, 99.000; Díaz Vélez, 97.000 y así señor presidente, sigue la nómina que termina con el propietario menos favorecido de todos éstos, que es la familia de Parravicini, con 31.991 hectáreas.

Por todo lo que antecede, señores diputados, es muy fácil darse cuenta de la extensión, de la profundidad, de la gravedad y de la dificultad de acometer este gravísimo problema del latifundio en nuestro país. Y no es un problema que se pueda abordar seriamente sin haber desarrollado antes una política preparatoria, sin haber hecho en el país una propaganda encaminada a despertar y hacer una conciencia del problema en las masas campesinas, que son las más interesadas y las más perjudicadas por esto; sin haber hecho también una campaña de preparación de los espíritus entre los hombres de pensamiento, entre las personas que puedan ejercer desde distintos puntos de vista y lugares una influencia favorable a la solución de este problema, y sin que se haya desarrollado previamente todo un sistema de impuestos encaminado a debilitar la fuerza del latifundio, a quebrar o destruir los atractivos que éste ofrece hoy a los que se benefician, es decir, a destruir el interés por las grandes extensiones de tierra y a destruir, también, la especulación, confiscando ese mayor valor que adquieren las tierras por el esfuerzo de la colectividad, por lo que se ha llamado el esfuerzo social.

Ya hace tiempo que el doctor Justo dijo que el latifundio enseñoreado de nuestras tierras ha debido engendrar en nosotros novísimos conceptos sobre la propiedad y nuevos sistemas impositivos. «El privilegio de la tierra es la fuente más copiosa y legítima del impuesto. La elevación continua de la renta del suelo en un país en pleno desarrollo como el nuestro, ha mantenido alto el precio de la tierra y ha fomentado la especulación». Y nosotros, país nuevo, necesitado de capitales extranjeros y de actividades industriales y comerciales importadas —me refiero a actividades sanas— nosotros, por influencias que yo no quiero señalar en este momento, hemos enderezado la evolución impositiva hacia el impuesto a la renta, cuando en un país como éste, carcomido por el latifundio y por la especulación en tierras, el impuesto indicado era la contribución

territorial progresiva y el impuesto al mayor valor. En un país como éste, la tierra constituye el privilegio esencial y el régimen impositivo debe gravitar principalmente sobre la tierra; pero operaron influencias, se nos sedujo a nosotros también, diciéndonos que el impuesto a los réditos serviría para anular o derogar malos impuestos de aduana, y este país tiene hoy una imposición sobre los réditos que grava las ganancias pero carece de una legislación impositiva que grave sobre la tierra.

Yo creo, señores diputados, que hay que preparar la política de acción contra los latifundios mediante un sistema impositivo racional y que es evidentemente éste que yo acabo de sostener.

En algunos de los artículos del proyecto aparece la expropiación por parte del Estado. Esa expropiación exige como condición previa e indispensable la implantación de contribuciones territoriales que hagan menos deseable a los terratenientes el acaparamiento de grandes superficies. Y para preparar la colonización en campos expropiados, el Estado argentino debe gravar más el suelo con el impuesto a la renta y confiscar lo más posible su futuro incremento tomando el mayor valor no ganado. Tal ha sido la política seguida para combatir el monopolio de la tierra en Nueva Zelandia, donde se implantó en los años 1892 y 1893, el impuesto territorial progresivo sobre el valor del suelo en las propiedades tasadas en más de 5.000 libras esterlinas. En Australia la tasa federal sobre la gran propiedad territorial comienza con un penique por libra esterlina sobre propiedades hasta un valor de 75.000 libras y se eleva a seis peniques por libra en las de un valor superior a 75.000 libras esterlinas.

Al impuesto territorial progresivo debería agregarse entre nosotros el impuesto al mayor valor. En esta forma la tierra quedaría más al alcance de los que han de cultivarla y engendraría entre nuestros agricultores una sana y progresiva psicología política.

Las altas razones de justicia social en que se basa el impuesto al mayor valor fueron muy bien expuestas en un mensaje enviado a esta Cámara por el presidente Sáenz Peña, el año 1912, acompañando su proyecto sobre impuesto al mayor valor de la tierra. En él decía que esperaba, con ese impuesto, favorecer la división de la tierra y atemperar la especulación agiotista, palabras textuales de su mensaje. En otro pasaje de los fundamentos de su proyecto decía el presidente Sáenz Peña: «Se trata de gravar el aumento de valor adquirido sin la intervención directa del propietario, valor que se

ha producido por factores extraños a la actividad del dueño y que en derecho estricto no ha sido ganado por él». Lástima grande que el presidente Sáenz Peña, que pudo introducir la gran reforma electoral, no haya podido realizar esta trascendental reforma impositiva.

Una idea muy difundida entre nosotros, especialmente entre los partidarios del latifundio, es la de que en este país no es necesario adoptar ninguna medida de carácter fiscal para desmenuzarlo, porque el latifundio se desmenuza aquí en virtud del proceso de la herencia. Esa idea es falsa, cuando no es sencillamente una sofisticación.

**Sr. Schoo Lastra.** — Si me permite el señor diputado...

**Sr. Repetto.** — Una vez que termine tendrá el señor diputado todo el tiempo necesario.

**Sr. Schoo Lastra.** — Es que hay ya anotados dos diputados para hablar y yo estoy deseando contestarle en caliente al señor diputado.

**Sr. Repetto.** — No en caliente, en frío tiene que ser.

Esa idea es falsa por dos razones, que son evidentes. Observamos en nuestro país que las familias terratenientes se organizan en sociedades anónimas a fin de evitar justamente esta parcelación que determinaría el proceso de la herencia. Asistimos, también, al proceso de formación de numerosas sociedades anónimas, cuya actividad consiste principalmente en acaparar tierras para distintos fines, para arrendarlas, para trabajarlas, para especular con ellas, etcétera. Ya el problema ha cobrado una gravedad tal, que en el seno de la Comisión de Legislación Agraria, en una de sus últimas reuniones, uno de sus miembros más representativos y conspicuos, señaló la necesidad de iniciar una legislación contra estas sociedades anónimas que se fragan para mantener el acaparamiento de las tierras.

**Sr. Schoo Lastra.** — Quisiera saber cuántas son.

**Sr. Repetto.** — Podría pedir la lista a la Inspección de Justicia.

**Sr. Schoo Lastra.** — Familias dueñas de tierras que se han organizado en sociedades anónimas, no creo que pueda haber muchas.

**Sr. Repetto.** — Señor diputado: escuche estas palabras de un talentoso legislador socialista del Uruguay, que posiblemente si no lo convencerán del todo, harán vacilar bastante los cimientos de sus convicciones agrarias. El talentoso legislador socialista uruguayo doctor Emilio Frugoni, que ha estudiado allí estos problemas que se parecen bastante a los nuestros, dice: «No se conseguirá poblar el país y



ponerlo en vías de una franca evolución económica y social, si no se promueve la reforma agraria. La tierra debe ser puesta al alcance del que la trabaje y haga producir, pero despojándola del carácter del privilegio mediante el impuesto a la renta y valor no ganado. Queremos nacionalizarla como valor social, pero dejándola en manos de quienes necesitan trabajar; provocar el fraccionamiento por el impuesto progresivo y al mayor valor, formando con el producido de estos dos impuestos un fondo para expropiar latifundios.»

Y ahora, señores diputados, una satisfacción, porque se tiene verdadera satisfacción en encontrar o en descubrir opiniones concordantes en los medios políticos opuestos. No tiene ninguna gracia que apoye todos mis argumentos en opiniones socialistas: la cuestión es que encuentre también en otros campos, y opuestos si es posible, opiniones autorizadas que vengan en apoyo de mi tesis. Y es lo que pasa en este caso. Hace no mucho tiempo tuve el placer de leer en un número de «La Razón» la conferencia interesante y erudita bajo muchos aspectos que pronunció el doctor Egidio C. Trevisán bajo los auspicios de la Cámara Argentina de Colonización. El doctor Trevisán estudia este problema extensamente y condensa sus opiniones fundamentales en un párrafo que voy a leer. Dice: «Si el latifundio es una rémora, la explotación pecuaria extensiva lo es igualmente —observación aguda que luego vamos a desarrollar con mayor extensión— porque constituye un ambiente poco propicio para el desarrollo de la familia, pues ocupa de preferencia peones célibes. El régimen de la propiedad pequeña y de la producción mixta es el más favorable para la explotación agraria. ¿Cómo llegar a la necesaria división de la tierra? Mediante la aplicación del impuesto progresivo sobre la tierra y del impuesto al mayor valor de la misma. Razones de bien colectivo, de carácter económico y social aconsejan la incorporación de estos impuestos a nuestro sistema tributario. El impuesto debe ser gravoso para las grandes extensiones de tierra como forma de acelerar su división; el impuesto debe ser más leve para la pequeña propiedad como medio de estimular su desarrollo y estas condiciones las realiza el impuesto progresivo a la tierra. El desenvolvimiento económico del país no podrá verificarse en toda su plenitud sin un adecuado régimen de la tierra.»

En una conferencia que pronuncié hace cuatro o cinco años en el monte de Arratibel, cerca

de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, ante una concentración de agricultores y demás gente de campo, traté de presentar una solución de fondo de la cuestión agraria, basado en las medidas fiscales preconizadas por Justo y estos otros autores que acabo de señalar, vinculándola un poco al sistema de expropiación adoptado por la ley agraria de la República Española. La solución de fondo era ésta: 1º Proceder a una valuación general de la tierra; 2º Sancionar la contribución territorial progresiva y el impuesto al mayor valor con carácter nacional; 3º Valuadas las tierras y sancionados los impuestos, se procedería a su expropiación en el orden siguiente: a) Chacras ocupadas por arrendatarios, las que se entregarían a los mismos ocupantes. Esto tiende a corregir una extraña tendencia, muy difundida entre nosotros, y según la cual el problema de hacer propietarios en este país, debe referirse solamente a los hombres traídos del extranjero. Aquí nadie se ocupa de que hay 80 ó 90.000 agricultores arrendatarios que tienen un inventario, que tienen una familia, que ya han demostrado su aptitud agrícola; para éstos no hay ni el más leve pensamiento ni el más leve asomo de beneficiarlos con las primeras estabilizaciones agrarias. Siempre se piensa que la tierra que vamos a colonizar será para los inmigrantes que podamos conseguir. Partiendo de un punto de vista opuesto, yo propongo aquí que las chacras expropiadas sean para los actuales ocupantes, para los que han demostrado allí, en el ejercicio de una tarea prolongada de años, su aptitud para el trabajo, sus condiciones morales y también su solvencia.

b) Expropiación de tierras situadas a no más de 20 kilómetros de una estación y 400 kilómetros de un puerto de embarque, para estabilizar también familias del país o algunas que puedan venir del extranjero; c) Tierras en las condiciones del inciso anterior que se utilizarían para el ensayo de cultivos en vasta escala, confiadas a sociedades cooperativas y agricultores.

Cuarto: para indemnizar a los dueños de las tierras expropiadas se aplicaría un sistema de amortización larga e interés bajo, servido el todo por los nuevos propietarios.

Creo notar en algunos semblantes una expresión de asombro por la forma tan rotunda y categórica con que yo propongo que los chacareros arrendatarios sean transformados en propietarios. Algún doctrinario extremo podría creer que yo caigo en una contradicción, que como socialista no podría ni debería defender la pequeña propiedad rural.

Pero voy a disipar al instante esa preocupación, esa duda, si es que ella ha surgido en alguien. Nosotros, yo sobre todo, desde mi incorporación a esta Cámara, siempre he defendido la pequeña propiedad de la tierra, si esa propiedad debía servir para utilizarla como instrumento de trabajo y lugar de vida; porque es evidente que la tierra no solamente es un instrumento de trabajo. Nosotras tenemos en cuenta el *standard* de vida de la gente que trabaja sobre la superficie del territorio argentino, donde lo único que preocupa es lo que se produce. Nadie se pregunta cómo vive esa gente, si tiene casa, si se baña, si hay agua potable, si hay asistencia sanitaria, si hay defensa social: nadie pregunta si hay todo eso en el campo argentino. A nosotros, que hemos considerado siempre la tierra como un instrumento de producción, un sitio de vida, un lugar donde se forma y crece una familia, donde nacen varios argentinos, no nos puede ser indiferente este concepto de la tierra considerada como el hogar de una familia. Es claro que hubo en el partido escrúpulos doctrinarios. Como nosotros suponemos que las cosas del mundo marchan hacia la socialización, hacia la colectivización, no podíamos de manera muy abierta hacer una excepción a la regla general de socialización de los medios de producción, defendiendo a la pequeña propiedad. Pero el hecho es que todos los partidos socialistas del mundo acabaron por comprender que en materia agraria, había problemas particulares que no podían englobarse dentro de la doctrina tradicional y que era necesario adoptar puntos de vista particulares. Nosotros habíamos comprendido mucho antes esos problemas, porque somos militantes socialistas que operamos en un medio donde estas cuestiones alcanzan un relieve, una importancia y un interés mucho mayores. Siempre fuimos partidarios de la pequeña propiedad y en la conferencia nacional celebrada por nuestro partido hace apenas un par de meses, resolvimos quebrar con todas estas ataduras y resabios de preocupaciones doctrinarias más o menos infundadas y sostener y defender abiertamente la pequeña propiedad.

En aquella conferencia se adoptó la siguiente resolución: Es deber de todos nosotros contribuir a acentuar la eficiencia del trabajo agrícola, estabilizando y ofreciendo seguridades a los hombres que le dedican su vida y sus afanes. Es fácil darse cuenta del trabajo rudimentario, fatalmente atrasado, que debe realizar una agricultura a cargo de familias obligadas a cambiar con frecuencia de lugar de trabajo y

de vida, desalojadas por la brevedad y la inseguridad de los contratos de arrendamientos. Es preciso estabilizar, arraigar al suelo a quienes lo trabajan, velando estrictamente por el cumplimiento de la ley de arrendamientos agrícolas, excelente instrumento que da la opción por cinco años, indemniza las mejoras, asegura la libertad de comerciar los productos y prescribe la inembargabilidad de ciertas cantidades para semillas, alimentos, animales e implementos de trabajo. Pero es preciso convenir en que la mejor manera de estabilizar al agricultor consiste en hacerlo propietario de la tierra que trabaja, para lo cual debe arbitrarse con urgencia en este país un sistema de colonización basado en los tres principios fundamentales siguientes: Tasación moderada de la tierra, amortización a cuarenta o cincuenta años e interés no mayor del 3 por ciento.

Si no vamos por ese camino, con este proyecto de ley no haremos nada. Si pretendemos colonizar sobre la base de los precios ficticios de carestía a que se cotiza la tierra para agricultura, no conseguiremos resultado alguno.

Pretender seguir colonizando de acuerdo a las condiciones onerosas establecidas por los Bancos Hipotecario Nacional y de la Nación, importará acentuar el fracaso del sistema a causa de la precaria condición de nuestra agricultura. Sobre este asunto habría mucho que decir, y algo he dicho en base a mi propia experiencia personal, pero me parece que basta con lo dicho para que quede consignada la necesidad absoluta de que se opere sobre tierra muy bien tasada, equitativamente tasada, y se carguen amortizaciones muy largas e intereses muy bajos. Si no, aquí no se colonizará nada; mucho más ahora cuando los precios de los productos agrícolas han sufrido una caída realmente catastrófica y cuando los agricultores no tienen plata, no digo para comprar la chacra, sino ni para pagar sus deudas.

Me voy a referir en una forma breve y lo más serena posible —y digo lo más posible porque se trata de un factor que me irrita y porque su prestigio, a mi juicio, está en relación inversa a su utilidad— a esta ganadería extensiva, que se practica en nuestro país y que representa el empeño y la imposición de cierta clase de terratenientes que supeditan la población, el comercio externo y la civilización del país, al mantenimiento de la ganadería en vasta escala, que requiere mucha tierra, pocos hombres y mantiene al país despoblado y su política en un evidente estado de atraso.

El crecimiento de la población argentina se halla doblemente retardado por la persistencia de las grandes estancias. Este régimen atenta contra la división y la población del suelo. Por otra parte, impone el celibato a la masa de hombres, relativamente reducida, que emplea en sus trabajos. Un peón de estancia es necesariamente célibe. Es un sistema de cría de ganado que mantiene y perpetúa el desierto. Es fácil imaginar la influencia detestable que semejante estado económico y social debe ejercer sobre el desarrollo de la civilización y del progreso político argentino. Las formas más bárbaras del caudillismo guardan estrecha relación con el régimen de la tierra. Alguna vez me he explicado algunos fenómenos políticos de la provincia de Buenos Aires basándome justamente en la existencia del gran latifundio y en este enorme culto por la estancia grande.

Todo está supeditado al novillo. Pero entre las consecuencias de esta ganadería extensiva hay una de gravedad extraordinaria. Las cosas se han ido acomodando de tal suerte en nuestro país, que la libertad de comercio se encuentra supeditada cada vez más a los intereses de los productores de vacas y novillos. El tratado Runciman-Roca nos asegura, a lo sumo, el mantenimiento por pocos años de las exportaciones, pero ha dado a los ingleses preferencias aduaneras, facilidades en los cambios, trato benévolo a sus capitales y también las leyes de coordinación de transportes general y urbano. El comercio y los negocios ingleses han experimentado por tal causa en nuestro país un gran incremento en los últimos años. Y los novillos han concluido por dominar todo el comercio exterior argentino. «En el tratado de Londres, dijo no hace mucho en un editorial el diario «La Prensa», todo el esfuerzo del Poder Ejecutivo se concentró sobre las carnes».

La ganadería extensiva tiene su política, que lo supedita todo a la exportación de carnes y aleja o retarda la solución del mal llamado problema ganadero, problema que terminaría evidentemente si aumentáramos la población del país para que ésta absorbiera el excedente de carnes que hoy nos vemos obligados a exportar. Se necesita aumentar la población del país para terminar con este eterno problema de la carne. Es preciso comprender que ahora nos conviene más criar hombres que novillos. Si nos decidiéramos a dividir los latifundios y a multiplicar las chacras mixtas tendríamos más habitantes, más consumidores, y hasta podríamos tener más novillos, porque en cada chacra podrían criarse algunas docenas de novi-

llos. Cuando yo he expuesto esta idea alguna vez, porque no es una idea nueva, me decían: ¡Pero, señor!, ¿cómo se va a mantener la calidad de ese renombrado, exquisito *chilled beef* que vendemos en Londres, si en lugar de mantener concentrada la producción ganadera en grandes establecimientos y grandes criadores, se la fracciona entre los chacareros argentinos?

Pues es un problema que se resuelve fácilmente. Estoy cansado de hablar con los hombres que encarnan la corriente de oposición a la actual política de la Junta de Carnes y ellos me han dicho que en el mercado de Liniers se encuentra *chilled* tan bueno como el que pueden producir las mejores estancias. Y me han asegurado hace poco que si todavía la junta no ha establecido la clasificación y tipificación de las carnes como lo determina la ley, ello se debe a que el día en que eso se haga se va a probar que produce tan buen *chilled* el señor Antonio Antonietti, italiano, dueño de una modestísima chacra de Villa María, provincia de Córdoba, como el señor Duhau. Cuando se establezca la clasificación y tipificación de las carnes se va a descubrir que el pequeño y modesto ganadero produce *chilled* tan bueno o mejor como el que pueden producir los grandes ganaderos y criadores preferidos por los frigoríficos.

Y ahora quiero referirme a un capitulito breve, que no ha sido especialmente escrito para el señor ministro, pero que espero querrá atender debidamente, porque está inspirado en un excelente propósito y en cierto modo coincide con ideas que el señor ministro ha expuesto en estos últimos tiempos.

Yo me hallo, señor ministro, bajo la penosa impresión de la lectura de un libro cubano que ha causado impresión y que hará época en la vida económica, política y social de aquella isla. Es el libro de Gabino Guerra y Sancho, que se titula *Azúcar y población de las Antillas*. Se imaginará el señor ministro que la lectura de este libro la he realizado a causa de los estudios que estamos haciendo sobre azúcar, pues no dispongo de mucho tiempo para entregarme a lecturas tomadas al azar.

En este libro el autor demuestra que el desarrollo avasallador de los grandes ingenios de azúcar ha traído como consecuencia la rápida desocupación de la clase de pequeños propietarios rurales independientes. Cuba tiene planteados problemas muy graves con relación a la propiedad de la tierra, a la rápida desaparición de la clase de propietarios rurales inde-

pendientes y al descenso constante del nivel de vida, debido al desarrollo de la industria azucarera. Yo no desearía, señor ministro, que estos problemas aparecieran revestidos de una gravedad mayor en la provincia de Tucumán. Yo desearía que ahora que estos fenómenos han empezado a señalarse en las provincias del Norte, pronto una ley pudiera terminar con ellos. *Yo no soy tucumano, sino argentino*, pero desearía para la provincia de Tucumán la formación de una clase agrícola estable, técnicamente educada y políticamente fuerte, para que ella constituyera el nervio de la población rural de aquella provincia. Ello equivale a decir que la agricultura tucumana debería descansar sobre muchas decenas de miles de pequeños propietarios independientes. Yo creo que esto es lo que le conviene a Tucumán y que esa misma evolución habrá de implantarse mañana en algunas provincias del Norte, donde la industria azucarera se ha iniciado ya con los caracteres trágicos que señala el autor de este libro.

La independencia política, señor ministro, es a veces una desgracia para los países. Yo no diría que lo ha sido para nosotros, pero reflexiono y me pregunto si ahora, a más de cien años de la independencia nacional, los argentinos no estamos más sujetos al capital extranjero de lo que estábamos en tiempo de la colonia con respecto a la metrópoli. ¿Nuestra sujeción, nuestra dependencia al capital extranjero no es ahora mucho más grande, más fuerte y más exclusiva que entonces? «Para Cuba, la independencia política permitió la entrada generosa del capital norteamericano, que al ponerse de lado de los ingenios aplastó al productor cubano. La vieja, próspera y libre agricultura cubana, en manos de pequeños productores, está en vías de desaparecer si no ha desaparecido totalmente. Un puñado de ingenios ha centralizado la propiedad de la mitad de la tierra laborable de la isla de Cuba. En mayo de 1935 los ingenios poseían 2.292.222 hectáreas, lo que representa la quinta parte del área sembrada en Cuba.»

La explotación latifundiaría necesita disponer de una clase proletaria lo más numerosa posible, y tanto mejor podrá disponer de ésta cuanto más la separe de la propiedad del suelo y de los restantes medios de producción, convirtiéndola de una clase de pequeños agricultores en una masa meramente jornalera.

Por esta razón, yo aspiro —y lucharé porque así sea— a que se separe el cultivo de la caña de azúcar, de la elaboración del azúcar, con-

fiando el primero, exclusivamente a una clase de agricultores libres, y la elaboración de la caña, exclusivamente a los ingenios. Una separación total de estas actividades para que la industria ocupe su sitio, y la agricultura el suyo. Por eso he leído con placer un proyecto presentado en estos últimos días por un grupo de diputados de esta Cámara, que tiende a realizar una política orientada en tal sentido. Pero desgraciadamente, es un proyecto para el futuro, que entraría en vigencia una vez que se hubiera dictado la ley reguladora del azúcar.

Ahora quiero ocuparme de los problemas secundarios, que no dejan de tener importancia extraordinaria para nuestro país.

La división de los latifundios es el gran problema de fondo que debemos acometer; pero claro está que simultáneamente debemos seguir atendiendo los otros problemas del campo, en primer término los que afectan a los arrendatarios, tan numerosos en este país y destinados a perdurar por mucho tiempo.

No nos hagamos ilusiones, señores diputados, de que estableciendo un régimen liberal de la tierra, llegaremos a anular por completo a los arrendatarios. Estados Unidos, que posee una legislación agraria de las más libres, nos ofrece cifras que son realmente desconcertantes para los que tienen esa opinión. He tomado cifras de una estadística que figura en un magnífico libro que acaba de editar el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, como primera parte del anuario del año que corre, libro dedicado enteramente al hombre y al suelo.

En los Estados Unidos, en el año 1880, había 4.008.907 chacras. Eran arrendatarios 23,6 %; el resto eran propietarios. En 1890 —los censos en Estados Unidos son decenales— las chacras ascendían a 4.564.641 y el número de arrendatarios alcanzaba a 1.204.903, o sea el 28,4 %. En 1900, las chacras subieron a 5.727.772, pero la proporción de arrendatarios subió al 35,3 %. El año 1910 subieron las chacras a 6.361.512, pero la proporción de arrendatarios subió a 37; y el año 1920 las chacras suben todavía a 6.448.343 pero los arrendatarios suben al 38,1 por ciento.

En 1930 las chacras bajan ligeramente de 6.400.000 a 6.288.000, pero los arrendatarios aumentan al 42,4 % y en 1935, una estadística hecha recientemente con motivo de la crisis, muestra que las chacras han vuelto a subir a 6.800.000 y que los arrendatarios han descendido ligeramente al 42,1 %.

Quiere decir que en los Estados Unidos el proceso del arrendatario sigue una marcha as-

cedente. Nos lo podríamos explicar pensando en que la tierra y el trabajo agrícola allí es bastante productivo, como para permitir al dueño de una chacra arrendarla a su vez e ir a vivir en la ciudad vecina.

El mayor número de arrendatarios está en las chacras de algodón: el 65 % son de arrendatarios; las de maíz: el 44 % son de arrendatarios; las de trigo, 42 %; las de tabaco, 49 %; las de arroz, 58 %; las de caña de azúcar, 45 %. La lechería —industria que necesita una mayor estabilidad— solamente el 18,6 %, está en manos de arrendatarios y las granjas en general el 29,5 por ciento.

Estas cifras revelan la importancia que aun conservan los arrendatarios y la necesidad de asegurarles condiciones estables, libertad de comerciar e indemnización por mejoras.

Entre nosotros urge reglamentar la ley de arrendamientos agrícolas e imponer a los terratenientes su estricto cumplimiento en nombre de un interés superior. Es bueno recordar, señores diputados, que de acuerdo a una investigación ordenada por el presidente Alvear —investigación que se condujo en forma realmente irreproachable, con un espíritu totalmente objetivo y de información— se llegó a la conclusión de que esa ley de arrendamientos agrícolas no se cumple por 29 razones, todas estrechamente vinculadas a la mala voluntad de los propietarios.

He recibido de uno de los numerosos colaboradores anónimos que tengo y que son los que a menudo me ofrecen juicios bastante sensatos y puntos de vista muy prácticos, una carta en la que me dice cosas que yo creo indispensable comunicar a los señores diputados para que se conozca la situación real del campo, ya que estamos tratando aquí un proyecto de ley de colonización. Dice: «La ley de colonización que se trata es una necesidad para el país, un bien para los auténticos trabajadores sin reínas de la tierra...»; son esas reínas que han aparecido últimamente en las reuniones de agricultores, cuya presencia no se explica muy bien si no se dispone de una cierta inspiración o sentido poético; «... y un freno para los propietarios avaros que son siempre los que se han convertido en propietarios por deceso de suegros, padres, parientes, etcétera, que no conocen sus tierras y tienen por norte el constante aumento del precio de los arriendos aunque los chacareros pasen hambre. Pero para que los chacareros se conviertan en dueños con el tiempo, es necesario acomodarlos para

que hagan ahorros y la única manera es abaratar el costo de producción y disminuir los gastos. Los arrendamientos actuales deben rebajarse al límite que permita lo que producen, pero como esto es un motivo de dilaciones por el tiempo que se emplearía en el estudio, hay que dictar una ley de rebaja y como complemento otra de modificación de la actual de arrendamientos. Los contratos deben hacerse por diez años en vez de cinco, para evitar que los chacareros se hundan en los gastos de mudanza, so pena de aceptar aumentos a los que están en vigencia y siempre que estén al día en los pagos deben prorrogarse por cinco años más. Digo diez años porque los primeros dos años casi siempre son perdidos por los chacareros por el tiempo que se gasta haciendo malas poblaciones, corrales, etcétera, trabajo a destiempo y desconocimiento de la tierra que se trabaja».

Evidentemente que estos anhelos de los chacareros no se concilian con las necesidades de la ganadería extensiva que impera en nuestro país, ganadería extensiva que necesita tener siempre la tierra libre de obstáculos, ya sea para aplicarla a la ganadería o ya sea para suabastarla o liquidarla. En una palabra, es una condición que no se aviene mucho con esta necesidad absoluta de estabilización que tienen los agricultores.

Continúa: «Salvo los que están en la zona maicera, los otros, los que llevan varios años de malas cosechas, no disponen de un peso para entrar en el plan de colonización ni pueden moverse de la zona donde los conocen y donde les dan un crédito moderado, que es con lo que se sostienen y viven. Las cooperativas no dan crédito y la mayoría desvirtúan sus buenos fines, porque se convierten en medios de vida para gerentes y algunos directores, que en algunos casos también han fundido sus respectivas cooperativas».

Entre los problemas secundarios, señor ministro, está la cooperación agrícola. Es un problema secundario, pero que debemos atender de inmediato, porque es fundamental en este asunto complejo de la organización de la agricultura argentina.

El Poder formidable de los latifundios, de los terratenientes, de los grandes ganaderos, de los bancos capitalistas, de los omnipotentes exportadores, de los comerciantes de la campaña, de las cámaras gremiales y del gremio de corredores, crea en nuestro país un ambiente o un clima hostil tanto para la multiplicación de los productores independientes como para

el desarrollo de la actividad económica propia de los agricultores.

De cooperativismo, señor ministro, como ya debe haberse apercibido, se habla y se escribe a profusión entre nosotros; pero la obra de ilustrar, de capacitar y de encauzar la acción cooperativa de los agricultores, encuentra siempre tropiezos que son a menudo insalvables. Existe una ley de cooperativas que confiere el reconocimiento legal de las mismas a una oficina o repartición del Ministerio de Agricultura. Basta que se presenten a esa oficina los estatutos de una cooperativa en vías de formación y que esa oficina los apruebe, para que esa cooperativa deba ser reconocida como tal y no tenga que someterse a ninguna otra tramitación.

Pues bien, señor ministro; todos los gobernadores de provincia tienen a este respecto su legislación propia e imponen trámites y gestiones a cooperativas reconocidas ya por el Ministerio de Agricultura, ajustadas por sus estatutos, sus procedimientos y sus fines a lo que determina la ley. Esas cooperativas son obligadas a nuevos trámites, a nuevos reclamos, a nuevos permisos, cuando no se les ponen obstáculos de naturaleza tal que les impiden en absoluto todo funcionamiento. Se ha hablado y discutido mucho sobre esto, pero no se ha visto —espero que lo veremos pronto— el gesto enérgico del Ministerio de Agricultura reclamando para sí las atribuciones que le marca la ley.

Por otra parte, asistimos ahora a la intromisión de reparticiones que, interpretando mal las leyes, creen tener la facultad de intervenir en las cooperativas, so pretexto de evitar confusiones que podrían ocasionar daños al público. Se ha pretendido, invocando disposiciones de la ley de bancos, intervenir en las cooperativas a los fines de obligarlas a suprimir las cajas de ahorro, si no en esencia, por lo menos a suprimir la denominación. Esto se lo ha intentado invocando la siguiente razón: que la existencia de ese resorte, caja de ahorros, permite u origina confusiones entre una cooperativa y un Banco, porque la alta autoridad bancaria supone que las cajas de ahorro sólo las tienen los bancos comerciales, cuando es conocido y demasiado sabido que las cajas de ahorro fueron fundadas, creadas o fusionadas en las cooperativas mucho antes que las crearan los bancos comerciales capitalistas. Y también la Dirección de Justicia tiene sus exigencias en lo que respecta a los balances.

De manera que nos encontramos ahora con esta situación: que tenemos una legislación cooperativa excelente, que contempla todos los casos, que describe exactamente las atribuciones, pero tenemos autoridades de uno y otro ambiente que traban el desarrollo y sobre todo dificultan la acción específica de estas organizaciones.

Sin querer hacer un reproche al señor ministro, porque no tiene en esto ninguna responsabilidad, creo descubrir también este espíritu de hostilidad, este propósito de dificultar el desarrollo de estas organizaciones, en la manera extraña con que se ha dado cumplimiento a la ley de elevadores de granos en nuestro país. Mientras los poderes encargados de dictar la ley se engolfaban en estudios interminables sobre los sistemas a adoptarse, hemos visto que el comercio privado de granos cubría de elevadores particulares una buena parte de la región agrícola argentina. Se comenzó a estudiar si realmente los elevadores son ahora necesarios, porque se descubrió que hay caminos y camiones que conducen el trigo a granel y se planteó la cuestión de saber si los elevadores serían necesarios ahora que los caminos permiten llevar el grano de las chacras a los puertos. Mientras nuestras autoridades estaban imbuídas en la dilucidación de este problema, en que todavía no han llegado a ningún resultado, los comerciantes de granos se reían de los caminos y de los camiones y construían elevadores propios. Mientras nuestras comisiones estudiaban el problema sin saber qué resolución tomar, en el país agrícola de Canadá, el país tradicional del elevador, cuya ley de granos hemos tratado de copiar en cierta medida, el número de elevadores crece constantemente. La estadística del año 1935, nos dice, señor ministro, que en el Canadá hay 5.732 elevadores de campaña en servicio público y que los elevadores en servicio privado se hallan en número reducidísimo. No digamos nada de los teóricos oficiales que surgen en materia de cooperación y cuya misión es sembrar el confusionismo. No se puede defender la cooperación diciendo que ella no se propone luchar con el comercio ni con el capital, que no es una institución de lucha sino de carácter evangélico, que busca el acuerdo, la paz, el acomodo y el arreglo entre los hombres. Eso es sembrar confusionismo. La cooperación, evidentemente, no viene en tren de guerra, no quiere destruir ni demoler, pero trae un concepto nuevo totalmente distinto, por cuanto si el comercio se ha movido, se mueve y se moverá

por mucho tiempo estimulado por el lucro—esto sea dicho en su sentido puramente económico—, es evidente que la cooperación actúa movida por una interpretación mucho más solidaria de los intereses en juego y a cargo de los mismos productores.

En los Estados Unidos de América del Norte se acaban de plantear en un informe ministerial que hará época, los más grandes y urgentes problemas de la agricultura. La necesidad de usar mejor el suelo ha aparecido a todos en una forma evidente. Se ha comprendido que el hombre trata al suelo con una severidad que está lejos de usar la propia naturaleza. Lo ara, lo pastorea y lo tala, a menudo, en exceso y sin medida. El fenómeno de la erosión, de los médanos y de las sequías persistentes, observado ya en nuestro país, nos obliga a pensar en la necesidad de adaptar los cultivos a las condiciones del suelo, es decir, a sembrar en cada zona lo que la misma puede soportar y producir. Es absurdo trabajar a pura pérdida, durante años seguidos, tierras ineptas para los fines a que se las destina. Preciso será buscarles nueva aplicación. Por otra parte, la distinta aceptación o precio que alcanzan nuestros productos agrícolas en el mercado internacional, nos obliga a ajustar la extensión de nuestros cultivos a las posibilidades de colocación. Podrá convenir en cierto momento acentuar la siembra de lino o maíz a expensas de la del trigo para facilitar la salida y valorizar nuestra producción.

Hace pocos días, señor ministro, a propósito de una minuta presentada por el señor diputado Cisneros, recordé que años atrás en esta Cámara y en forma incidental me referí a las condiciones poco aptas para la agricultura que ofrecen algunas regiones de La Pampa, referencia que tuvo la virtud de provocar un verdadero estallido en el ministro de Hacienda, que se encontraba en el recinto. El ministro creyó que yo difamaba, que si mis palabras trascendieran al público determinarían de inmediato una baja considerable en el precio de las tierras de ese territorio. Y yo dije eso, señor ministro, en virtud de un informe que me había sido dado por un funcionario del Banco de la Nación. Yo sabía que el crédito concedido a los agricultores en general, aun antes de dictarse la ley de crédito agrario, era un crédito otorgado a gente solvente, a gente que paga. Los chacareros pagan, siempre que tengan con qué pagar; son hombres tímidos, que no disponen de los recursos para burlar la acción de los acreedores y que teniendo pagan sus cuen-

tas. Y ese funcionario me dijo que si no fuera por los quebrantos que dan algunas sucursales del Banco ubicadas en aquellas regiones, el crédito agrario sería sano en un cien por ciento. Una información de ese género, a mi juicio, debería ser seguida de una política concordante: si hay una región que da quebrantos sucesivos, donde prestar dinero es exponerse a aumentar constantemente las deudas, ¿por qué no se restringe ese crédito bancario, por qué por un proceso de restricción progresiva no se llega a su anulación completa?

Han pasado algunos años, pero no vemos la reacción. Sabemos cuáles son las condiciones reales de algunas regiones de La Pampa y sin embargo, señor ministro, los procedimientos no cambian. ¿Hay informes de aquella región que son realmente dolorosos y desconcertantes.

Yo creo que los préstamos acordados suman \$ 8.760.000 y que los últimamente acordados, para vivir y para comer, sólo sirven para resolver los problemas del comercio local, que es el que va a cobrar, pero son préstamos que no rendirán beneficio alguno a los agricultores. Tengo una carta que procede de una de esas regiones y en la que se hace esta consideración: «Si esos 7 u 8.000.000 de pesos que el gobierno ha entregado ahora para auxiliar a esta pobre gente se hubieran gastado en salarios para esa misma gente, haciendo obras públicas en aquellos territorios, plantando en parte esos árboles y esos pastos, esos céspedes, que se aconsejan ahora para inmovilizar los médanos y combatir la erosión, se habría hecho una obra pública de beneficio y esa gente habría recibido en concepto de salarios una buena parte de esta suma.»

Cuando se habla del problema de la colonización es absolutamente necesario, señor ministro, vincularlo a dos fenómenos: al de la desocupación y al de la denatalidad, ese fenómeno tan aparentemente reciente y que ha sido puesto de moda últimamente por algunas iniciativas de legislación.

Concedo que en materia de progreso técnico tenemos la obligación de aceptar y aplicar los implementos o inventos que significan un progreso. Una conducta distinta sería un verdadero suicidio, un retroceso; sería no comprender las exigencias reales de una evolución económica sana. Ponerse a despotricar contra el elevador de granos porque deja desocupados a algunos cargadores de bolsas en las estaciones; ponerse a criticar la difusión del camión porque determina la liquidación más o menos ruinosa de los tradicionales fletadores que he-

mos conocido y que tienen que vender sus carros y caballos poco menos que por nada; oponernos a las cosechadoras y a las cintas eléctricas para la formación de pilas de bolsas; oponernos mañana al empleo de máquinas recolectoras de algodón o maíz porque dejan sin trabajo a algunos hombres, sería adoptar una posición absurda, ir contra un progreso que a la larga acabaría por imponerse.

Vinculamos este problema a la colonización y sostenemos que al mismo tiempo que se acepta así inteligentemente la colaboración de esos nuevos medios técnicos, hay que ir abriendo un cauce de ocupación para todos los hombres a los cuales la incorporación de esos medios técnicos deja sin trabajo. Quien trabajaba antes en el movimiento de bolsas en las estaciones y queda hoy sin tarea por aplicación del elevador, debe lograr ocupación, y ésa no puede ser otra, señor ministro. —si se reflexiona serenamente— que la de colocarlo en un lote de tierra ofreciéndole las condiciones necesarias para establecer su hogar y formar allí su explotación agropecuaria.

El problema de la colonización hay que vincularlo también al problema de la denatalidad. Hace ya ocho o diez años que en los informes anuales del director de la Oficina Internacional del Trabajo se denuncia que en todos los países del mundo —no solamente en la Argentina—, la natalidad ha disminuído, la nupcialidad ha disminuído, la morbilidad ha disminuído y la mortalidad ha disminuído también. El mundo se ha higienizado, los matrimonios han disminuído y los nacimientos también.

¿Cómo vamos —no digo a resolver, porque sería una pretensión absurda— cómo vamos a aportar algún auxilio, algún remedio, algún atenuante a esta situación? ¿Cree algún diputado que dándole 10 pesos mensuales a un padre que ha tenido dos hijos va a engendrar uno más por los 10 pesos que le demos? ¿Cree que esos subsidios podrán influir para estimular la natalidad? Acaso los que pudiendo tener cinco hijos no tienen más que uno, ¿no han resuelto eso deliberadamente, de acuerdo a razones, argumentos y consideraciones que cada uno se habrá hecho? El problema no se resuelve con dar 10 pesos más por cada hijo; habría que dar antes la plata para que pudieran tenerse los hijos, y no después. Hay que facilitar por todos los medios posibles la formación de nuevas parejas, porque es evidente que cada pareja se forma para tener por lo menos un hijo. Esa sería la contribución que se podría prestar al aumento de la población.

Para todo el que ha sabido observarlas, las chacras argentinas ofrecen un aspecto que no puede pasar inadvertido para el estadista, para el hombre de gobierno. Suelen verse en cada chacra cuatro, cinco, seis hijos, y en algunas hijos mozos que tienen 20, 25, 28 años, y aun permanecen junto a sus padres en calidad de peones recibiendo sumas mensuales exiguas. Estos hombres nunca están en condiciones de desarrollar libremente una actividad o una iniciativa. ¿Qué vamos a hacer con esos hijos de chacareros que llegan a la mayor edad? ¿Habrá que mantenerlos en calidad de peones para sus padres? ¿O habrá que invitarlos a irse al pueblo para que se empleen en cualquier cosa, o para que vaguen por las calles y se estacionen en las esquinas?

Ahí tenemos otro problema vinculado con la colonización. Hay que favorecer a cada uno de esos hombres, con tierras, con materiales de construcción, con implementos de trabajo, para que puedan tener su chacra, formar su hogar y criar allí su familia. De otro modo, irán a aumentar el número de vagos que pululan en los pueblos, o aumentar el ejército de linieras que circulan por todo el país.

Y voy a terminar, señor presidente, refiriéndome a los efectos calculables de esta ley. Yo no sé lo que esperan de ella los señores diputados que la voten; yo la votaré también, pero no pondré en ella demasiadas ilusiones.

La ley incorpora al consejo agrario una inmensa repartición con toda su armazón burocrática, la Dirección de Tierras y Colonias. Fué necesario transigir. Cuando comenzamos a ocuparnos de este problema, no pensamos en eso; pero a medida que íbamos avanzando en el estudio, debimos tener en cuenta esa vasta repartición; tuvimos que preguntarnos qué hacer con ella. ¿Reducirla, deshacerla? En este país es muy difícil suprimir un empleo: se puede destituir o dejar cesante, —como se dice elegantemente en el lenguaje administrativo— «dejar en comisión» a un mundo. Pero creo que suprimir del presupuesto una repartición en este país no se ha visto ni se verá jamás. Nos vimos obligados a fagocitarla, a introducir en este consejo de colonización toda esa enorme repartición que es la Dirección de Tierras y Colonias, con su estructura y con sus antecedentes no siempre plausibles; en fin, con todo ese conjunto de vicios, errores y deformaciones impropios de una organización flamante como es esta que proyectamos ahora.

Esta organización que proyectamos dispondrá también de las tierras que están en poder



de los Bancos de la Nación e Hipotecario Nacional y que ellos no han podido colonizar. Si el Banco Hipotecario Nacional, que es un banco colonizador por excelencia, y el Banco de la Nación, que últimamente se ha hecho también un banco colonizador formidable, no las han podido colonizar, no me parece muy probable que esta comisión que se crea por la ley pueda hacer la colonización que no han hecho esos establecimientos.

En cuanto a la expropiación, quiero hacer algunas reflexiones. Creo que una gran parte del auspicio que tiene esta ley que estamos discutiendo, se debe a este hecho: todas las veces que desde el gobierno se habla de colonización, hay una cantidad considerable de personas que ensayan una sonrisa de satisfacción. Estas piensan que cuando el poder público se dispone a entrar a la colonización, dará la oportunidad de colocar a buen precio campos poco aptos, cargados de hipotecas y con deudas que sus propietarios no pueden solventar. Mi experiencia personal me dice que siempre que se habla de colonización, hay muchos propietarios de malos campos que esperan la oportunidad de vendérselos al gobierno a buen precio. Toda vez que se trata de expropiar se plantean problemas de una gravedad extraordinaria, porque las leyes, la jurisprudencia y la tradición judicial están siempre a favor de los propietarios y los precios de las expropiaciones suelen ser fantásticos.

Otra consideración fundamental. Si bien es cierto que la propiedad rural ha descendido mucho de precio en razón de la extraordinaria baja de los productos agropecuarios —circunstancia que se podría considerar favorable porque podríamos tasar y pagar bajo los campos—, no es menos cierto que la baja de los productos constituye un hecho desfavorable para los agricultores, que no disponen de saldo positivo para destinarlo a la compra de la chacra. Las dificultades que experimentan los bancos oficiales para vender las tierras de que disponen, prueban el fundamento de mi aserto.

Hay una circunstancia que va a dificultar los trabajos de esta comisión: es la política inflacionista en materia de tierras seguida por el Banco de la Nación. Hace dos años asistimos a una lucha muy interesante entre el Banco de la Nación y el Banco Hipotecario. Este redujo las tasaciones y mantuvo bajos los precios de la tierra. El Banco de la Nación hizo una política inversa: acordó los préstamos —que antes eran a cinco años y que ahora son a diez— tasando muy alto la tierra y dando en efectivo el 80 %

de la tasación. El hecho es que esta política del Banco de la Nación ha creado un estado de confusión y de inflación en los precios de la tierra. La tierra es el gran problema de fondo que debemos resolver. Claro está que simultáneamente deberemos atender a la solución de los otros problemas secundarios y más inmediatos del campo, entre los cuales figura preferentemente el de los arrendamientos y el de los arrendatarios.

Debemos trabajar para que se reglamente de una vez la ley sobre arrendamientos agrícolas, reglamentación que, según entiendo, constituye en estos momentos la preocupación del trabajo del señor ministro. Debemos prohibir o dificultar en el país el subarriendo; trabajar para que se organicen las cooperativas agrícolas, dándoles la administración de los elevadores oficiales; para que mejore de continuo la capacidad técnica, económica y cultural de nuestros agricultores, tanto para la producción como para la venta del fruto de su trabajo; para que se arraigue el hombre a la tierra y se desarrolle el gusto por la vida del campo, llevando a éste todas las ventajas de la vida civilizada moderna: higiene, confort, cultura, defensas sanitarias, asistencia médica, esparcimiento y posibilidades de sociabilidad.

Los hijos ya grandes de los actuales chacareros comienzan a aborrecer la vida del campo: prefieren trabajar o vegetar en los pueblos y ciudades. Es un fenómeno explicable: las nuevas generaciones tienen otro concepto de la vida y, por tanto, otras exigencias. No podríamos pretender que aceptasen gustosos hoy la vida que llevaron sus padres hace cincuenta años, de trabajo rudo y tenaz en un ambiente desprovisto de todo confort. Algunos millares de voluntades firmes y esclarcecidas, legiones de argentinos bien intencionados deben trabajar y llevar a cabo este proceso de renovación total de la campaña argentina.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Fassi.** — Pido la palabra.

Hemos escuchado un discurso profundo, en que se ha presentado una visión panorámica de todos los problemas del agro argentino. Me incumbe la misión más modesta de volver al despacho de la comisión, hacer su análisis, a fin de contribuir a que la sanción de la Honorable Cámara encare las soluciones de este problema de la mejor manera posible.

Anticipo el voto favorable de mi sector para el despacho, sin perjuicio de que algunos de sus componentes formulemos en la discusión

en particular observaciones que tiendan a mejorarlo, pues ese voto nuestro no significa que estemos del todo conformes con la estructura de la ley. Y en segundo lugar, de que ofrece deficiencias técnicas y no tiene la claridad que corresponde a una ley agraria.

La ley que estamos discutiendo debiera ser, como dijo el señor miembro informante, de una importancia trascendental. El plan del artículo 1º es efectivamente de una gran trascendencia, no sólo económica sino también política. Se ha demostrado en el curso del debate la preocupación de nuestros primeros gobiernos patrios por una equitativa distribución de la tierra, y es que ello constituye un supuesto necesario de todo régimen democrático de gobierno. La igualdad política supone una relativa igualdad económica; supone que el ciudadano goce de un mínimo de bienestar y tenga la posibilidad de alcanzar para sí mismo o para los suyos, todas las posiciones sociales y económicas. De lo contrario, al convertir a las grandes masas en depositarias de la soberanía, y al ilustrarlas, se pone en peligro el orden social, pues ningún interés tienen en defender instituciones que las sumen en la miseria, mientras crean la opulencia de unos pocos privilegiados.

Por eso es que quienes comprendemos la responsabilidad de la función pública sentimos inquietud ante la realidad rural argentina, y cualquiera sea nuestra especialización jurídica, no podemos guardar silencio cuando se discute una ley agraria, ni disimular nuestra desilusión cuando ella no encara con suficiente eficacia y energía este grave y fundamental problema.

Esta es una ley, señor presidente, que nace bajo el signo de casi todas las leyes argentinas, elevadas en sus propósitos, insuficientes en cuanto se refiere a los medios de realización. Es como la ley de casas baratas, sancionada en 1915, frente a un problema grave, con un gran sentido patriótico, pero que no ha impedido la agravación del problema de la vivienda. Es como la ley del hogar, que no ha amparado a la familia argentina; es como la ley que acabamos de sancionar hace poco tiempo de protección a la infancia en edad escolar, que combate un síntoma y no va a las causas reales del mal.

Nuestra ley, en el mejor de los casos, señor presidente, servirá para otorgar la tierra en propiedad a ocho o diez mil familias de arrendatarios relativamente pudientes. Y para ello se crea un gran organismo y se estructura un

despacho que acuerda todo género de facilidades, con una financiación organizada sobre la base de un interés módico, que no permite encarar en el futuro un plan integral sobre la base de emisión de títulos o cualquier otra que exige el concurso del capital privado para darle mayor amplitud y alcance a esta obra de la colonización.

Yo creo, señor presidente, que es otro el problema agrario argentino de urgente realización. Ha dicho el señor miembro informante que en 1937 existían 439.874 explotaciones agrarias en las que se ocupaban y tenían trabajo 164.871 propietarios y 197.174 arrendatarios. Falta decir que más de 2.000.000 de argentinos nativos no son ni propietarios ni arrendatarios; son peones rurales, nómades, desocupados, desnutridos, enfermos, que no tienen la posibilidad de constituir familia ni de explotar un palmo de esa tierra argentina cuya libertad es obra de sus mayores. Este es el drama rural argentino que exige del Congreso una solución inmediata, integral, audaz, suficiente, en defensa de la raza, del destino, de las instituciones y de la paz social argentina.

El señor diputado por la Capital en su madurada exposición ha insistido, como la mayor parte de los señores diputados que han hablado en este debate y de los autores de proyectos, sobre la situación del arrendatario y ha presentado un cuadro real del amargo destino de los hijos de arrendatarios.

Pero, señor presidente, esos son los problemas que se nos presentan muy cerca, en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe. Para darle una ley a la Nación Argentina hay que mirar también hacia el interior, que plantea no sólo el problema del arrendatario ni del hijo del arrendatario, sino el de esa inmensa masa de ciudadanos que emigra periódicamente para trabajar en los ingenios, en la cosecha del maíz o del algodón y que vuelve a su provincia de origen sin un solo centavo ahorrado, pero disminuídos físicamente por las enfermedades endémicas y venéreas.

El problema agrario argentino está muy bien enunciado en el artículo 1º del despacho, pero queda olvidado en sus posteriores disposiciones.

Se propone en primer lugar el aumento de la población rural. Esta es entre nosotros, en los actuales momentos, una cuestión demográfica y no de mayor producción. La estructura económica de las naciones en vía de consolidación tiende al cierre de los mercados al consumo dirigido, el desiderátum de bastarse a sí

mismas. Las naciones de gran densidad de población no se conforman con una función puramente industrial. Quieren arrancar a sus tierras insuficientes y cansadas las materias primas necesarias para sus industrias y los alimentos imprescindibles para sus poblaciones. Por lo demás, las necesidades militares son tan apremiantes y supremas, que las disponibilidades de las naciones no pueden dedicarse a la compra de productos agrícolas ganaderos.

Y a su vez los países semicapitalistas como el nuestro, tienden a crear su propia industria. No se conforman con desempeñar en la división del trabajo internacional la función de productores agrícolas ganaderos, sino que al mismo tiempo quieren desarrollar sus industrias para bastarse a sí mismo.

No podemos seguir, frente a estos hechos, la política suicida de multiplicar nuestra producción cuando faltan mercados para colocarla. Es más el nuestro un problema de consumo que de producción, en que debe perseguirse, no un mayor volumen de la producción, sino la posibilidad de que el pueblo argentino viva en condiciones más higiénicas y saludables, de que consuma más y de que exista un mercado interno nacional. En consecuencia, éste es un problema más que de fomento de la inmigración, de elevación del nivel de vida de la masa rural argentina. No se trata de introducir millares de familias agricultoras extranjeras sino de asentar en la tierra, capacitándolos técnicamente, a los parias del agro argentino. Con ello se aumentará la producción, es cierto, pero también en la misma medida la receptividad y la capacidad de consumo de la población rural argentina.

Pero cabe preguntarse: ¿Y el aumento de la población rural que busca el proyecto? Vendrá, señor presidente, pero por un camino muy distinto al que auspiciaba con tanto calor el señor miembro informante, no ya en los transatlánticos, sino en el vientre fecundo de las madres argentinas.

La madre argentina es fecunda. El día que gocen de bienestar, el día que puedan alimentarse y alimentar a sus hijos, el día que puedan criarlos con comodidad e higiene, serán legión las madres que merecerán la medalla con que la patria pueda premiar a la que haya sabido darle 15 hijos. Hoy son numerosas las que alumbran 15 hijos, pero no pueden ofrecerlos a la patria en la edad del servicio militar, pues se abren prematuras las tumbas.

No debe suponerse que me coloco en una posición contraria al fomento de la inmigración.

Nieto de inmigrantes, mal podría albergar tal sentimiento. Pero creo que han variado las condiciones en cuya virtud los organizadores del país la reclamaban con tanta insistencia; creo que mientras no se inicie una nueva era de división del trabajo internacional, debemos ser parcios a fin de que los productos de la tierra no se amontenen en depósitos y frigoríficos por falta de compradores.

Debemos colocarnos, además, en el momento actual, en el momento presente, que es sin duda muy distinto al que producía la grave preocupación de los fundadores de nuestra nacionalidad. Hoy nuestro país no ofrece el espectáculo de una extensión dilatada sin quienes la trabajen. Hoy el país presenta una dilatada extensión pero al mismo tiempo una inmensa masa rural en condiciones de trabajarla, a la que no se le da la capacidad técnica, ni el capital, ni la tierra para que produzca y se multiplique en el agro argentino.

El segundo propósito de la ley es la racionalización de las explotaciones rurales. ¿Cómo lo persigue? Primero, declarando que no puede ser expropiada la tierra que fuera objeto de explotación agraria racional verificada directamente por su dueño, aunque exceda de mil hectáreas, cualquiera sea su extensión. Quiere decir que respecto al latifundista que trabaja su tierra en forma racional, no existe ningún peligro de que esta ley de colonización pueda afectarle.

Me parece que este medio de racionalizar la producción ha sido mal excogitado, que atenta contra los demás propósitos de la ley, y especialmente con los que inspiran una iniciativa que he presentado conjuntamente con otros diputados de mi sector y que ha merecido la alabanza del señor diputado socialista por la Capital. Me refiero a la división y venta de la tierra de los ingenios plantadas con caña o remolacha, a los agricultores que tengan familia a su cargo. Observando los resultados del censo de 1937, he considerado que no era posible dictar una ley de regulación de la industria azucarera sin afinar a la familia de los agricultores que se dedican a esa industria agrícola. Me ha movido los resultados del censo de 1937, donde se nos indica que en la provincia de Tucumán, donde existen agricultores que tienen hasta 25 surcos —es decir, menos de media hectárea y donde casi la inmensa mayoría de agricultores independientes tienen menos de 40 surcos—, existen sin embargo seis propiedades que tienen más de 1.250 hectáreas de cultivo, y cuatro que tienen más de

2.500 hectáreas. En la provincia de Jujuy existe una propiedad con más de 1.250 hectáreas de cultivo, dos con más de 2.500 y una propiedad con 6.129 hectáreas. En la provincia de Salta existe una propiedad con 1.544 hectáreas y otra con 7.201 hectáreas. En una provincia donde se cultiva caña en 9.363 hectáreas —y es una de las principales explotaciones de la región— 7.201 pertenecen a un particular. No conozco esas tierras...

**Sr. Labayen.** — Es un magnífico esfuerzo del hombre.

**Sr. Fassi.** — ... pero presumo que han de ser racionalmente explotadas. Coincidió con el señor diputado: es un magnífico esfuerzo el de un particular que llama a la riqueza 7.200 hectáreas argentinas; y si se tratara de un cultivo entregado a la libre concurrencia comercial, mientras todos pudieran explotar azúcar, saludaría ese esfuerzo magnífico de un representante de la economía liberal, pero sostengo también que si damos una ley reguladora que obligue al consumo nacional, también tendríamos que convertir a la tierra en un bien social y asentar familias de agricultores argentinos.

Estas explotaciones son, como he dicho, muy racionales. Es más: el costo de producción en estas explotaciones es inferior que el que resultaría si se asentaran familias argentinas en pequeñas extensiones; pero esta ley no debe buscar exclusivamente la racionalización de las explotaciones sino la democratización de la tierra, para que la mayor parte de la clase campesina argentina sea propietaria. Cuando la mayor parte de los argentinos sean propietarios, podremos considerar definitivamente asentadas nuestras instituciones democráticas y ese día vivirá la República su realidad democrática.

El otro medio sería el sometimiento del colono a un sistema racional de explotación de sus lotes, organizado por el artículo 33 de la ley. Pero esto ha de abonar la afirmación que habrá parecido un poco aventurado de que esta es una ley mal estructurada; este artículo, tal como está redactado nunca tendrá efecto.

El señor diputado por Entre Ríos que formuló un proyecto tal vez más avanzado pero más perfecto, ha dicho en su inteligente exposición que existirá un doble período en la acción colonizadora: un primer período, que llamaremos contractual, en que el futuro propietario tendrá un boleto de compraventa y estaría sometido a un contrato con una serie de cláusulas rescisorias y obligado a cumplir con las dispo-

siciones del artículo 33 y otras más como la que lo obliga a asentarse y vivir en el fundo, so pena de que se produjera la rescisión del contrato. Vendría luego un período en que se pasaría del derecho personal al derecho real, convirtiéndose el adquirente colono, en propietario de la tierra.

En el proyecto de despacho existe la disposición que aclara cuándo la compraventa se reduce a escritura pública, es decir, cuando cumplida la tradición y existiendo justo título, por medio de la escritura pública se transmite el derecho real. Eso estaba claro en el proyecto de despacho, pero esto no está claro ni surge de ninguna disposición del despacho. Según el despacho, desde que el colono paga el 10 % a cuenta de su predio, queda convertido en propietario. No se trata de una simple manifestación, porque hay dos artículos que lo demuestran. El artículo 30 establece que durante el primer período que podríamos llamar contractual, el adjudicatario de la tierra, el colono, no puede proceder a su venta, no puede transmitir. Y se establece a continuación, lo siguiente: sin este requisito los registros de la Propiedad no anotarán transferencia alguna de dominio de los predios vendidos a los agricultores por el consejo. ¿Qué quiere decir señor presidente? Que como el Registro de la Propiedad no inscribe el dominio sino cuando se han cumplido todos los requisitos en cuya virtud se transmite la propiedad, durante este primer período en que se establecen disposiciones respecto a la organización de las explotaciones y normas de cultivo, y el capítulo que se refiere a rescisión de contratos, es inoperante dentro de esta ley y no desempeña función de ninguna especie.

Como si la comisión quisiera aclarar más su criterio, incluye un artículo 52, que establece que durante ese primer período sólo podrán constituirse hipotecas en favor del consejo agrario nacional. ¿Qué quiere decir esta disposición? Quiere decir que el dominio ha sido transmitido desde el primer momento, porque no puede constituir hipotecas sino su titular.

De modo que sólo quedarían sometidas a este régimen contractual las personas que no pudiendo pagar el 10 % a cuenta del precio, entraran en la tierra en concepto de arrendatarios.

Pero además esta ley no contiene ninguna norma que asegure la futura explotación racional del lote, una vez que el colono se convierte en propietario. Como tampoco contiene ninguna disposición que defienda los demás propó-

sitos de la ley una vez abonado el precio del lote, según demostraré más adelante.

El tercer propósito enunciado en este magnífico artículo 1º consiste en la subdivisión de la tierra y la estabilización en ella de la población rural, sobre la base de la propiedad de la misma. Este es el supuesto necesario de los demás. El bienestar de los trabajadores agrarios, el aumento demográfico en el interior del país; el éxito de la intervención del Estado en materia agraria, depende de la subdivisión de la tierra, y de su otorgamiento en propiedad al que la trabaja. Por ello es que referiré a este punto central mi crítica al proyecto, previa una necesaria digresión.

El Código Civil ha sido criticado en esta materia de la propiedad. Pareciera, señor presidente, que Vélez se hubiera inspirado en el interés particular; pero no es así: Vélez se inspiró en el interés social tal como lo entendían los más luminosos economistas de su tiempo. Si defendió la propiedad, si le cedió la amplitud que hoy merece la crítica de algunos señores diputados, es porque entendió que la propiedad era el fruto del trabajo y era un medio de trabajo. En la nota al artículo 2.508, expresa claramente que la propiedad está sometida al interés general. Y debe destacarse también, como justiciero homenaje, la cierta visión que tuvo del problema que planteaba la organización democrática en nuestro país. El código de Vélez tiende a la división de las fortunas, con sus disposiciones sobre régimen sucesorio, que significan no sólo la abolición del mayorazgo, sino la división de la herencia entre los herederos de un mismo grado. Tiende a la división de las fortunas también con la institución de la legítima, en cuya virtud no es posible que el causante otorgue todos sus bienes a un solo sucesor, sino que teniendo herederos forzosos, la herencia se subdivide, la fortuna se distribuye y se democratiza.

Y tanto ha sido esa la posición de Vélez que casi todas las disposiciones del Código Civil se inspiran en el propósito de movilizar la propiedad; tienden a que las fortunas no se establezcan. Esta misma preocupación es la que le dictó la regla en cuya virtud se prohíbe la indivisión forzosa. No basta la conformidad de los herederos en un determinado momento; no basta la voluntad del causante para que la tierra, para que los bienes, para que la fortuna permanezca en estado de indivisión. Ha habido una cierta visión del problema que impone la democracia en esta cuestión de economía privada. Pero, no obstante, el mapa de la República es un ver-

dadero mosaico en el que, con escasas parcelas racionales, concurren enormes latifundios y minúsculos minifundios.

Es que es grande el poder de la concentración, lo que no debemos olvidar en las disposiciones de esta ley. Y además, desde ahora diré, para fundar proposiciones que presentaré en la discusión en particular, que estas sabias disposiciones del Código de Vélez Sársfield, que tienden a la nivelación económica, a la división de la fortuna, son útiles respecto a las grandes concentraciones, pero producen enormes perjuicios cuando se trata de la pequeña propiedad.

He estado hace poco tiempo en la provincia de La Rioja y he aprendido allí que si debe merecer nuestra preocupación el problema del latifundio, no es menos grave el del minifundio, de la pequeña explotación agraria, que no da a la familia lo suficiente para vivir con cierta holgura, pero que ata a la tierra con la fuerza enorme que tiene el derecho de propiedad.

Volviendo al despacho y al problema de la división de la tierra, para que su propiedad corresponda a quienes la trabajan, debemos ocuparnos de los tres factores fundamentales: el factor humano, el factor capital y el factor tierra. Debemos considerar otra cuestión no menos importante como es la que se refiere a la racionalización de las explotaciones rurales y a los medios tendentes a asegurar la perpetuidad de la obra realizada en cumplimiento del plan agrario.

➤ Respecto al factor humano, que es el medio y el fin de la colonización, el despacho ignora la realidad argentina: sólo tiene en cuenta el elemento rural con capacidad económica profesional y personal y que tengan ciertos medios de fortuna.

¿Quiénes son los agricultores en posesión de elementos de trabajo y de animales suficientes para su explotación? ¿Quiénes los que han actuado en trabajos agrícolas similares durante un período de tres años? ¿Quiénes con espíritu de ahorro, con cariño por la tierra, con la aspiración de asentarse en ella convirtiéndola en una continuación de su personalidad? Solamente los actuales arrendatarios.

Es cierto que el colono arrendatario —mal protegido por la ley de arrendamientos rurales— es el factor predominante de la producción agrícolaganadera; ofrece un aceptable desarrollo de las facultades técnicas necesarias para la explotación racional de la tierra, que ha de ampliarse el día en que se asiente en ella como propietario; tiene además capital porque

le pertenecen los implementos de trabajo, algunos animales y a veces ahorros. En sus filas se reclutan, aunque con dificultad, los que llegan a la propiedad de la tierra dentro del libre juego de las leyes económicas. Es alta y previsora función social arraigarlos a la tierra, confiriéndoles su propiedad y desarrollando además en ellos su ya relativamente suficiente capacidad técnica y su insuficiente capacidad cooperativa.

Pero si es elemento de más fácil asimilación para un plan de división de la tierra, no es el que más reclama la urgente acción del Estado. El despacho ha seguido el camino más fácil, pero no el más necesario. Se me dirá que con los limitados recursos de la ley, mal podría perseguirse otro propósito. No es razón. Pudo, por lo menos, arbitrase los medios para ensayar institutos y organizaciones referidas al resto de la población de la República que no posee suficiente capacidad técnica, que vive en la indigencia o semindigencia y que posee, sin embargo, verdaderos tesoros de energía que nadie ha querido ni sabido descubrir en ella.

No se trata, como he escuchado recién, del «linyera». Se trata posiblemente de 2.000.000 de habitantes de la dilatada extensión argentina.

Se me dirá también que hay que comenzar por lo más simple para que se acredite el plan colonizador. Pero, señor presidente, el plan colonizador tal como ha sido estructurado por la comisión, si se acredita, ¿qué demostrará? Demostrará que es posible asentar en la tierra al arrendatario rural; pero no demostrará que puede cumplir esa necesaria función de política social de capacitar técnicamente y convertir en propietario de la tierra que cultiva, al que no ha llegado al mismo grado de capacidad técnica ni tiene el capital, ni la tierra necesaria para asentarse.

—Suenan la campanilla que señala la terminación del plazo acordado al orador.

Hablo en nombre del bloque.

Diré con quiénes debemos contar para el plan colonizador. En primer término, con el trabajador rural. Esa es la obra urgente de política social argentina. Es un paria en su propia tierra. En las provincias que han dado en llamarse ricas trabajan como máximo ocho meses del año, por una mala retribución y una pésima vivienda; el resto del año no tienen recursos y viven miserablemente, sin familia, sin hogar y sin ventura. En las provin-

cias llamadas pobres se ofrecen a la voracidad de los negreros que una vez por año los conchaban para la zafra azucarera, o migran para las cosechas del algodón y del maíz.

He conocido, como he dicho, a esa población genuinamente argentina en la provincia de La Rioja, y enmudecerían definitivamente mis labios si no reclamaran del Congreso, en nombre de su miseria, cuando se les excluye de una ley de política agraria integral, como pretende serlo la que estamos estudiando.

Esa población rural vive, como he dicho, en constante migración; se sienten atraídos por la ciudad, donde la miseria parece menos horrible; forman en las ciudades del interior verdaderos campamentos con desechos y latas donde se aglomeran en forma antihigiénica e inmoral a la espera de un trabajo que no pueden darles las rudimentarias e incipientes industrias urbanas.

La ley de colonización debe reintegrar al medio rural esa población que se urbaniza por desesperación.

No debe renunciar tampoco al aporte del proletariado urbano. La descongestión obrera de las ciudades por la transformación del asalariado en colono ha sido encarada en numerosos planes de colonización. En el proyecto del ex diputado Quirós, en sus fundamentos, se aclara y se explica la posibilidad de ésta que sería una gran acción social. Y existen ejemplos de realización. Saben los señores diputados que la mayor parte de los colonos de las colonias agrarias israelitas no eran, en su tierra de origen, agricultores, sino comerciantes, porque en la antigua Rusia existía una serie de prohibiciones que impedían a los israelitas el cultivo de la tierra. Sin embargo, trasladados a un medio rural esos hombres que habían estado dedicados al comercio en medios urbanos, han resultado eficientes agricultores.

Debemos nosotros, país agricolaganadero, dirigir la acción tutelar del Estado hacia el fomento de la población rural. Uno de los medios que podría excogitarse para este fin, dentro de un plan de colonización, es el que se vincula con los menores abandonados. El problema de la infancia abandonada sólo puede tener una solución racional en nuestro medio: su preparación y posterior incorporación a las tareas agrarias. Debo destacar en este sentido el proyecto presentado por los señores diputados Pinto y Arbeletche, cuyo artículo 4.º inciso b), que la comisión ha desdenado, tiende a orientar a los menores abandonados, como a

la población urbana desocupada, hacia las tareas rurales mediante la colonia escuela.

Entre nosotros ha hecho ya mucho el Estado en materia de capacitación técnica para las tareas rurales. Tenemos dos establecimientos universitarios que otorgan títulos de ingeniero agrónomo y de veterinario. Tenemos escuelas de instrucción media técnicopráctica en Casilda, Córdoba y Mendoza. Tenemos escuelas elementales prácticas, tales como la escuela de practicultura y lechería de Bell Ville, la escuela práctica de ganadería y agricultura de Las Delicias, la escuela práctica de ganadería de Olavarría, la escuela práctica de cultivos subtropicales de Posadas, la escuela práctica de agricultura de San Juan. Además, en la ciudad de Tucumán funciona, dependiente de la universidad, la escuela técnica de sacaritecnia y fructicultura, donde se imparte una enseñanza adecuada para la preparación de técnicos en esas especialidades.

Pero, ¿qué sucede a la persona que, queriendo orientarse en esas actividades, concurre a una escuela práctica y no tiene medios de fortuna? Le sucede que al término de sus estudios no tiene otra posibilidad que la de aumentar la población rural asalariada, los conchavados de las estancias, que viven en condiciones tales que no pueden aceptarlas los que han gozado de las comodidades que les diera la escuela.

Cuando se trata de un plan integral de colonización, es necesario demostrar con un amor sincero a la República, tal como lo ha hecho el proyecto de los señores diputados Pinto y Arbeleteche, esa población agraria emancipada, en la población carcelaria, entre los delincuentes ocasionales evolutivos, aquellos que han delinquido por factores sociales de medio, pero que no son en realidad perversos.

Dice el maestro Ferri: «Donde quiera que exista aglomeración humana, hay fermentación y putrefacción humana. Sólo el trabajo al aire libre responde a las necesidades de la higiene física y moral.» Llevemos, pues, al ambiente sano de los campos al liberado que en las ciudades encuentra un medio de perversión y de repudio que lo mueve a reincidir en el delito.

Ya ven los señores diputados que el factor humano no ha sido contemplado en la ley, ni siquiera en el artículo 33, que se ha mencionado especialmente y que se refiere a otra materia: a la técnica de la explotación. El factor humano, contemplado con la amplitud que debe tener, plantea otro problema: el de la capacitación

técnica y educación moral del futuro propietario. He leído con mucho interés la ley agraria de Chile del año 1935, que conjuntamente con todo el movimiento relacionado con las reformas agrarias, ha motivado un interesantísimo libro de un señor diputado que honra a este cuerpo con su dedicación por tales problemas: el doctor Bernardino Horne. He visto que en un medio parecido al nuestro, donde sin duda se debe insinuar esta especie que también prospera entre nosotros, de que el trabajador del interior está definitivamente perdido para la acción civilizadora de una colonización integral, la ley dedica un capítulo a este problema de las colonias agrarias y de los aspirantes a colonos para convertir a esos campesinos rutinarios en ciudadanos útiles para el país.

Debemos introducir en nuestra ley las disposiciones que existen en la chilena y con ello habremos contribuido a mejorarla y darle el sentido social que afirma el artículo 1º, pero que no encontramos en el resto del proyecto.

Debemos también, dar preferencia en la adjudicación de lotes, a los egresados de las colonias escuelas agrícolas, cualquiera que sea su fortuna.

El factor capital también está deficientemente considerado. Imagino que dado el propósito de racionalización de las industrias agropecuarias, no se querrá que las parcelas que se formen en las colonias agrícolas se exploten de la manera rudimentaria en que se explota la mayor parte del agro argentino. Anhelamos una explotación racional, y ello supone una suma de capital muy superior que el que se necesita para la rudimentaria.

Un plan integral de colonización no sólo debe considerar el factor humano, sino asimismo fundamentalmente la forma cómo se va a habilitar al colono, cómo se le va a proporcionar capital. Y en esta ley se supone que los que van a colonizar, han de tener los elementos necesarios, pues si bien un artículo dispone que se introducirán mejoras en las parcelas, otro artículo establece que esas mejoras no pueden aumentar en más de quince por ciento el valor de la tierra. Suponiendo que la parcela costara 15.000 pesos, las mejoras sólo podrían ascender a 2.250 pesos. Esto significa la continuación de las prácticas actuales de vida en el campo. Eso no significa la casa cómoda, la vida higiénica, los elementos de trabajo suficientes para una explotación agraria que responda a los propósitos de racionalización de la agricultura.

Existe, además, una deficiencia que llamaría de método legislativo. Las disposiciones que se

refieren a la habilitación del colono con capital no tienen la ubicación que les correspondería dada su enorme importancia: aparecen en el último capítulo de las disposiciones generales; y en uno de los discursos que escuchamos en la sesión pasada, se manifestaba que esa habilitación del agricultor con capital sería exclusivamente para hijos de agrarios.

No insistiré demasiado en estas cuestiones, y paso al factor «tierra». Tenemos desde ya una cantidad de hectáreas para colonizar, que no entran dentro de mis cálculos y conocimientos. Resulta señor presidente, que los bancos nacionales, que el Instituto Movilizador y el Consejo Nacional de Educación son los más grandes latifundistas de la República Argentina. Detentan la propiedad de 4.147.898 hectáreas, según los datos estadísticos que se han publicado. Tenemos que la Dirección de Tierras puede entregar a la acción colonizadora, 1.119.471 hectáreas. Pero sin embargo, las tierras más ricas, están en poder de los particulares.

Con respecto a las tierras de los bancos, formularía señor presidente, dos observaciones, la primera al artículo 19, que establece que las tierras de propiedad de los bancos del Estado o las instituciones de éste, serán cedidas al Consejo Agrario Nacional en cuanto se presten para la función colonizadora, pero siempre que a los bancos les sea garantizado el importe que hubieran invertido para la adquisición de las mismas.

¿Cómo se producen estas adjudicaciones de tierras a bancos, que no tienen por función la propiedad de la tierra? Se produce generalmente, señor presidente, cuando los bancos persiguen el cobro de sus créditos, se remata o se liquida los inmuebles de sus deudores y no hay adjudicatarios. Es así como la tierra entra a ser propiedad de los bancos. Quiere decir que los bancos en la generalidad de los casos los adquieren por precios que no están dispuestos a pagar los particulares; las adquieren demasiado caras y es hacerle un mal presente al Consejo Agrario Nacional obligarle a que compre la tierra a los precios que han pagado los bancos.

Y yo me permitiría hacer, por mi parte, otra sugerencia. Entiendo, señor presidente, —y es opinión mía, no de mi sector— que los bienes inmuebles del Instituto Movilizador debieran ser entregados al consejo agrario sin cargo, porque sería, en realidad, un reintegro de lo que el erario público le entregó a ese instituto para formar su reserva.

En cuanto a la adquisición de la tierra de los particulares, hay en el proyecto algunas disposiciones repetidas. Casi todos los incisos del artículo 8º están enunciados en los incisos del artículo 7º. Además, el artículo 10, que entiendo se refiere a esta cuestión, a pesar de que habla de la adjudicación de las tierras cuando debiera referirse a la adquisición, establece dos procedimientos para ello: la licitación pública y el remate público. Veremos más tarde que existe un tercer procedimiento que es la expropiación. Pero no contiene una previsión acertada e interesante del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, el del artículo 16, que establece que la comisión en ningún caso podrá adquirir un inmueble a un precio mayor que el menor fijado por cualquiera de sus miembros. El precio aconsejado se mantendrá en reserva hasta después de la subasta o de solicitar al Poder Ejecutivo la expropiación del inmueble.

Hay aquí ideas muy interesantes que deben ser incorporadas al proyecto. De nada vale que se le prohíba al Consejo Agrario Nacional adquirir privadamente tierras, si no se guarda en la subasta pública el secreto de lo que está dispuesto a pagar por ella, porque si es de conocimiento público, nunca comprará por un centavo menos porque no es posible suponer candidez en los vendedores de la tierra.

Este asunto de la expropiación suscita fundamentalmente un problema sobre el que no me he de extender, porque presumo que ha de ser encarado por algún señor diputado. Me refiero a la facultad amplia que se acuerda al Consejo Agrario Nacional, con el simple asentimiento del Poder Ejecutivo nacional, de expropiar tierra sin una ley del Congreso que declare en cada caso la utilidad pública.

Pero fuera de eso, que sería la cuestión fundamental, muchas son las observaciones que sugiere de inmediato la lectura de los artículos 14 a 16.

Así, el primero de esos artículos contiene un serio error de cita. Dice que sólo podrán adquirirse tierras por expropiación cuando no se hayan podido obtener en las condiciones especificadas en el artículo 9º. ¿Y qué dice el artículo 9º? Dice cuáles son las condiciones para que la tierra sirva para la colonización. Pero por el artículo 12, resulta que la única tierra que podría ser expropiada es la que no sirve para funciones de colonización. Hay un error evidente: en lugar de citarse el artículo 9º, debió citarse el artículo 10.



**Sr. Palacio.** — Se trata de un error material.

**Sr. Fassi.** — Pero los errores materiales abundan en este despacho, señor miembro informante de la comisión, y no han sido salvados.

**Sr. Palacio.** — Pero, señor diputado, se trata de un error de detalle...

**Sr. Fassi.** — En una ley tan importante como ésta hay que cuidar esos detalles.

El artículo 13 determina las tierras que no pueden ser objeto de expropiación, en primer lugar, las sometidas a una explotación racional verificada directamente por su propietario. Esta parte del artículo la he explicado en su oportunidad. Pero la segunda parte, y sin duda será otro error material cometido por la comisión, dice que la expropiación debe referirse a extensiones que no excedan de mil hectáreas de superficie. Observen los señores diputados que en lugar de combatir el latifundio, esta ley tal como aparece estructurada por la comisión, ataca las propiedades que tienen una extensión relativamente aceptable.

**Sr. Palacio.** — Es un error material.

**Sr. Fassi.** — Fuera de esta observación, que se refiere a un error material que no ha sido observado por la comisión...

**Sr. Palacio.** — Es tan evidente que en la discusión en particular íbamos a hacer la aclaración.

**Sr. Fassi.** — ... existen otros que indudablemente han de ser aclarados.

Se presentan como distintos estos dos conceptos: por un lado toda explotación racional no podrá ser expropiada y, por otra parte, aún las no explotadas racionalmente, las explotadas rudimentariamente no podrán ser expropiadas con la aclaración actual de la comisión, si no exceden de mil hectáreas.

Esto atenta contra el propósito de racionalizar las explotaciones agrarias urbanas.

Porque entiendo, salvo otra aclaración de la comisión, que este artículo 13 también se refiere a las expropiaciones necesarias para las expropiaciones necesarias para las explotaciones agrarias de los radios urbanos. El concepto de latifundio no hay que referirlo exclusivamente a la extensión, porque a las puertas de la ciudad de Buenos Aires una extensión de 999 hectáreas de tierra es un latifundio más grave que 10.000 hectáreas en un territorio nacional, y porque 7.201 hectáreas plantadas con caña de azúcar significa mucho más que un latifundio de 20.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires.

El artículo 14, invocando el interés público, establece el precio de las expropiaciones, el

valor de los bienes a expropiar, y dice que éste no podrá exceder del que surja de su valor en relación con el de su producción apreciada en los últimos 10 años precedentes al de la expropiación y con prescindencia de todo otro factor que pueda determinar una apreciación distinta. Sería oportuno que la comisión manifestara si éste será el único criterio para fijar el valor, o si por el contrario se acudirá a los varios sistemas excogitados en la redacción del artículo 20.

Sigue un artículo que parece ser la modificación, la suavización diríamos así, de uno mucho más enérgico, mucho más grave, mucho más fundamental, y que figura en el proyecto de despacho del señor diputado por Entre Ríos.

El señor diputado por Entre Ríos, inspirándose en algunas legislaciones modernas, establece que las tierras ociosas al término de cierto tiempo, se convierten en tierras vacantes. Es una idea un tanto avanzada, que ya ha merecido el acogimiento de altos institutos jurídicos de nuestro país y la opinión de muchos profesores de derecho. Si no la quería aceptar la comisión, estaba en su derecho, y posiblemente de acuerdo con la opinión de la mayoría de la Cámara. Pero lo que no es posible admitir es transformar ese artículo tan fundamental en el artículo 15 de este proyecto, que declara simplemente que cuando el propietario no explota su fundo durante cinco años se lo puede expropiar en las mismas condiciones del artículo 13, es decir, pagando la producción de los últimos diez años. Creo que con una leve modificación del artículo 13, este artículo que parece ser la suavización de una disposición revolucionaria, podría desaparecer con ventaja para el despacho de la comisión.

El artículo 16 —porque voy a observar todos los artículos de este capítulo, sin que signifique una amenaza de que he de seguir observando todos los de la ley— también es insuficiente y defectuoso. Cuando me refería a las sabias previsiones del Código Civil argentino tendentes a la división de las fortunas y a la democratización de la riqueza, observaba que no ha logrado su objeto en gran parte por el poder de las fuerzas de concentración. Esas fuerzas de concentración se han de hacer sentir también con respecto a los resultados de la colonización si no tomamos en la ley disposiciones tendentes a defenderla. ¿Cuáles son esas disposiciones? Existen previsiones posibles, acertadas, que son una modificación de!

régimen del Código Civil con respecto de estas propiedades, que nos salvarían de su concentración futura. Las he propuesto en algunos artículos del proyecto que he fundamentado, respecto a la división de las tierras destinadas al cultivo de la caña de azúcar.

Cuando redacté los artículos no conocía una ley modernísima que conozco ahora, la ley sobre chacras hereditarias, de Alemania publicada el 29 de septiembre de 1933, creando fundos hereditarios que sólo pueden transmitirse indivisos y a un heredero y que es imposible gravar o vender. Si le hemos dado a la tierra una extensión que está de acuerdo con la capacidad de trabajo de una familia de agricultores; si hemos querido que esa tierra cumpla esencialmente una función social; si no se ha formado por el libre juego de las fuerzas económicas, sino que ha concurrido el Estado con sus recursos, con su ley de colonización, con fijación de tipos de interés que son más bajos que todos los que rigen para el libre comercio; será natural que también le demos a esta propiedad el carácter de un dominio menos pleno, de un dominio que sólo pueda transmitirse por venta a otra familia de agricultores y que no pueda dividirse por causa de muerte, sino que correspondía a un descendiente del fundador elegido por éste o que hubiera demostrado una mayor capacidad económica, formando recursos para desinteresar a los demás herederos, o en último caso, discernido por el libre arbitrio del juez de la sucesión.

Hay que salvar esa pequeña propiedad que crea la ley, de estos dos peligros: del peligro de una posterior concentración y del peligro de una excesiva división que, como dije antes no convierta al propietario en señor de la tierra sino en su esclavo.

¿Qué establece la ley en esta materia tan importante y fundamental? Establece que cuando se concentra de nuevo se podrá expropiarla en las mismas condiciones de la que nunca ha sido motivo de colonización. Pero son muy limitados los recursos de que dispone el Estado para realizar esta acción colonizadora y no es posible que, a través de los siglos, estemos comenzando siempre la tarea de asentar a la familia agricultora en el agro argentino.

Respecto del régimen de explotación considero que una ley de esta especie se debe hacer con el concepto de que existen, como dijo el señor diputado por Entre Ríos, los dos períodos: el que yo llamaría contractual, en que no hay en favor del colono más que un contrato rescindible si no racionaliza la explotación, si

no vive en el fundo y si no cumple con los compromisos que la ley establece. Pero se debe decir, expresamente en la ley, que existe tal período, en el cual no hay más que una relación contractual entre el consejo agrario argentino y el colono; y se debe decir en forma clara y terminante cuándo termina ese período y cuándo el agrario se convierte en propietario de la tierra.

Este primer período debe ser suficientemente amplio. La supervigilancia del consejo agrario sobre el colono, todavía no propietario, no debe extenderse a pocos años, buseando, con apresuramiento, que el agrario proceda a abonar el precio de su adquisición. Debemos fijar tipos de amortización que comprendan largos años y derivar los recursos y las posibilidades de los colonos a un mejoramiento de su explotación granjera, a una vida cómoda y feliz que convierta al campesino en un ciudadano privilegiado, en cuanto a todos los goces de la vida.

Se debe establecer después, como dije, un dominio revocable —no un dominio expropiable—, de modo que cuando esa propiedad formada con el sacrificio del erario público, no cumpla más su función social, quede el dominio revocado y vuelva la propiedad al Consejo Agrario Nacional para que la entregue a mejores manos o mejores actividades.

He analizado, señor presidente, con la mayor brevedad los tres elementos: el factor hombre, el factor capital y el factor tierra. Quiero enunciar brevemente algunas ideas con respecto a otras cuestiones. No he de profundizarlas, porque no creo que haya llegado la ocasión y porque he tratado de ceñirme en esta exposición al despacho que nos ha formulado la Comisión de Legislación Agraria; pero sí debo decir que me preocupa el sistema de financiación. Dada la importancia de la acción colonizadora, deseamos sinceramente que la palabra «hasta» no se convierta en un obstáculo para la eficacia de la sanción que nosotros deseamos dar.

Creo con el señor diputado por la Capital, que un plan de esta especie debe contar con recursos propios, con una base de sustentación que surja de impuestos creados con el mismo concepto y que tiendan al mismo fin.

¿Qué queremos? Subdividir la tierra argentina, otorgarla en propiedad a los que la trabajan. ¿De dónde debemos sacar los recursos? De los que concentran la tierra e impiden el cumplimiento de un plan integral de esta magnitud, tan importante para nuestras instituciones y para el futuro de nuestro país. No es posible modificar al respecto el despacho, pero

desde ahora debemos acostumbrarnos a la idea de que un plan de colonización integral necesita recursos propios.

Voy a terminar, señor presidente, explicando por qué razón, a pesar de nuestra disidencia con tantas disposiciones de la ley, votaremos favorablemente el despacho. Es necesario crear el organismo porque entendemos que con el andar del tiempo y de acuerdo con lo que nos enseñe la realidad social argentina, traeremos las reformas necesarias para que este organismo marche, para que este organismo crezca y para que cumpla una magnífica función social.

Creo que son estas ideas posiblemente las que han inspirado la firma del despacho por unanimidad, pues supongo que la mayor parte de los señores diputados que lo firman, en obsequio a la sanción de la ley, han renunciado a muchos puntos de vista particulares. Y debo decir como representante de un partido político eminentemente argentino, que esa unanimi-

dad en la decisión de crear la pequeña propiedad me complace, porque me demuestra que se han sacrificado doctrinas y principios para afrontar el problema social argentino, y demuestra también que todos los partidos políticos en nuestro país comprenden que la tarea de democratizar las instituciones exige que de un extremo a otro de la República la familia propietaria sienta amor, no solo por la patria, sino también por las instituciones de la patria.

He dicho. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Labayen.** — Pido la palabra.

La Cámara ha escuchado importantes discursos y está indudablemente fatigada. Formulo moción de que pasemos a cuarto intermedio hasta mañana a la hora de costumbre.

**Sr. Presidente** (Kaiser). — No habiendo número para votar, queda levantada la sesión.

— Era la hora 20 y 35.